

101ª REUNION — 5ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 1º DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig, Palmiro B. Bogliano,
Miguel P. Del Pero y Teodosio F. Pizarro

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
AGUIRRE CÁMARA, José
ALFONSIN, Raúl E.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARROYO, Ramón F.
BACCAY, Rodolfo D.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BILBAO, Saturnino
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CANTONI, Angel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CATALAN, Guillermo
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo I.
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL PERO, Miguel P.
DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMÍNGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNANDEZ, José M.
FERNANDEZ, Raúl
FERNANDEZ NUÑEZ, Isidro
FERREIRA, Jorge W.

FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio
GARCÍA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GOMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRÉ, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LEÓN, Luis Agustín
LUCO, Juan A.
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSCO, Adalberto O.
MASSOLO, Eduardo A.
MENDEZ DOYLE, Abel Victor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOR ROIG, Arturo
MUNIAGURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco
NOUGUÉS, Isaías J.
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNANDEZ, Angel H.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PEREIRA, Antonio
PÉREZ, Raúl
PERNASETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao

PIZARRO, Teodosio F.
RENÉ, José María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
RODRIGUEZ, Rogelio Ramón
ROIS, Roberto
ROSITO, M. Oscar
ROZAS, José E.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalie David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Héctor R.
SARRULLE, Oscar E.
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
SOLARI, Juan Antonio
TACHELLA, Eliberto S. J.
TARULLI, Pascual
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE de PÉREZ TORT, Lidia
VAZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

ANTÓN, Luis
ARRASCAETA, Félix de
AVETA, Francisco O.

AUSENTES, CON LICENCIA:

AVILA, Eduardo Miguel
BERRINI, Emilio
COGGIOLA, Luis S.
CHEBLE, Francisco R.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
LLAVER, Santiago Felipe
PEÑA Y LILLO, Silvestre
SCALITER, Juan
VACA LOBO, Juan Manuel

AUSENTES, CON AVISO:

BACHINI, José A.
 CALVÓ, Carlos Alberto
 FERRARI, Luis
 GODOY, Ruperto Honorio
 LOZANO, Martín
 LLORENS, Héctor
 MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
 MERCADO, José Ignacio
 MOLINAS, Ricardo F.
 MONTE, Ricardo Álvaro
 MOSSET ITURRASPE, Mario

PALACIOS, Alfredo L.
 POSSE, Melchor S.
 RASINES, Osvaldo Gregorio
 REQUENA, Raúl María
 ROBERTO, Mario
 SCARPELLO, Cayetano
 SCHAPIRA, David

AUSENTES, SIN AVISO:

ACHIARY, Juan C.
 BOFFI, Luis L.
 BUSACCA, Salvador F.
 CALABRESE, Pablo

CARO, José Armando
 CASTELLAR, Miguel A.
 CENTENO, José Isaac
 DÍAZ, Diógenes C.
 FERNÁNDEZ MENDY, Julio O.
 LESCANO, Edmundo A.
 LILJESTHROM, Eduardo R.
 MARTÍNEZ, Ramón S.
 PÉREZ GALLART, Alcides B.
 RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
 RODRÍGUEZ VAGARÍA, Eduardo
 ROMEU VERDIER, Gabriel
 VIÑALS, Fernando J.

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría. (Pág. 6689.)

2.—Apertura de la sesión. (Pág. 6690.)

3.—Asuntos entrados:

I.—Poder Ejecutivo:

1.—Mensaje: informes sobre pavimentación de la ruta nacional 131 y del tramo Crespo-Diamante de la ruta 132, Entre Ríos. (Pág. 6690.)

2.—Mensaje: informe sobre la no reglamentación de la ley 14.597, de Estatuto Profesional del Músico. (Página 6690.)

3.—Mensaje: promulgación de la ley 16.499, de inclusión de profesionales de la Secretaría de Estado de Transporte en la ley 15.740. (Pág. 6693.)

II.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Pág. 6693.)

III.—Dictámenes observados:

1.—El señor diputado **Bogliano** observa el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda contenido en el orden del día 417. (Pág. 6693.)

2.—El señor diputado **Serú García** y otros observan el dictamen anteriormente indicado. (Pág. 6694.)

IV.—Dictámenes de comisión. (Pág. 6694.)

V.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 6694.)

VI.—Peticiónes particulares. (Pág. 6694.)

VII.—Proyectos de ley:

1.—Del señor diputado **Minsk** y otros: pavimentación de la ruta nacional 95. (Pág. 6695.)

2.—Del señor diputado **Ortiz Hernández**: edificio de Correos y Telecomunicaciones en Laborde, Córdoba (Página 6696.)

3.—Del señor diputado **Berini**: subsidio a la Biblioteca Popular Vicente López y Planes, de Olivos, Buenos Aires. (Pág. 6696.)

4.—Del señor diputado **Bo**: denominación de las islas Malvinas. (Pág. 6697.)

5.—Del señor diputado **Jofré**: confirmación del personal del ex Instituto del Trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo. (Pág. 6697.)

6.—Del señor diputado **Palacios** y otros: declaración de interés nacional de la investigación de causas de mortalidad infantil y creación del Instituto Nacional de Investigaciones Pediátricas. (Pág. 6698.)

7.—Del señor diputado **Nougués**: terminación del ramal ferroviario entre Superí (Catamarca) y La Cocha (Tucumán), del Ferrocarril General Belgrano. (Pág. 6699.)

8.—Del señor diputado **Casas**: provisión de agua y desagües cloacales y pluviales en la ciudad de San Salvador de Jujuy. (Pág. 6699.)

9.—Del señor diputado **Belnicoff**: aumento del haber básico mínimo establecido por ley 14.854, de pensión a los descendientes de guerreros de la Independencia. (Pág. 6700.)

VIII.—Proyectos de resolución:

1.—Del señor diputado **Cárdenas**: pedido de informes sobre viajes al exterior del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y cuestiones conexas. (Página 6700.)

2.—Del señor diputado **Nougués**: pedido de informes sobre incendio en la motonave «Río de la Plata». (Pág. 6701.)

3.—Del señor diputado **Bravo (H. F.)**: derogación de un subsidio a la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. (Página 6703.)

4.—Del señor diputado **Cantoni**: pedido de informes sobre servicio ferroviario directo entre San Juan y Córdoba. (Pág. 6704.)

- 5.—Del señor diputado **Coral**: pedido de informes sobre régimen de contrataciones de la Sastrería Militar. (Página 6704.)
- 6.—Del señor diputado **Fernández (J. M.)** y **otros**: pedido de informes sobre la intervención en la Empresa Líneas Marítimas Argentinas. (Pág. 6705.)
- 7.—Del señor diputado **Catalán** y **otros**: pago, por el Estado, de jornales adeudados al personal del diario «Democracia». (Pág. 6706.)
- 8.—Del señor diputado **Nougués**: pedido de informes sobre dejación sin efecto de designaciones y promociones en la Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria. (Pág. 6706.)
- 9.—Del señor diputado **De Cara**: derogación de la prohibición de la exhibición del film *Los cuarenta cuartos*. (Pág. 6707.)
- 10.—Del señor diputado **Garófalo**: inclusión en sesiones extraordinarias de la reforma de la ley 15.801 de plan siderúrgico. (Pág. 6708.)
- 11.—Del señor diputado **Casas**: inclusión en sesiones extraordinarias del proyecto de fijación del mínimo de tres diputados para la representación de las provincias ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (Pág. 6708.)
- 12.—Del señor diputado **Muñiz**: interpelación al señor ministro de Defensa Nacional sobre intervención de nuestras fuerzas armadas en el Operativo Ayacucho. (Pág. 6708.)

IX.—Proyectos de declaración:

- 1.—Del señor diputado **Bravo (H. F.)**: inclusión en sesiones extraordinarias de la expropiación de inmuebles en locación por el Estado nacional con destino a establecimientos escolares. (Pág. 6709.)
- 2.—Del señor diputado **Nougués**: restricción en los gastos públicos y misiones designadas para ir al exterior. (Página 6709.)
- 3.—Del señor diputado **Elena**: cambio de designación de la Orquesta Sinfónica del Estado. (Pág. 6710.)
- 4.—Del señor diputado **Berini**: designación del titular de la Secretaría de Estado de Comercio. (Pág. 6710.)

4.—Giro de asuntos entrados. (Pág. 6712.)

- 5.—**Moción** del señor diputado **Alfonsín** en el sentido de que se autorice a la Presidencia a girar los asuntos entrados a las comisiones respectivas. Se aprueba. (Pág. 6712.)

6.—Licencias. (Pág. 6712.)

- 7.—**Plan de labor** propuesto por el señor diputado **Alfonsín** en nombre de la Comisión de Labor Parlamentaria. Se aprueba. (Pág. 6717.)
- 8.—**Cuestión de privilegio** planteada por el señor diputado **Murmis**. Pasa a comisión. (Pág. 6717.)
- 9.—**Estatuto de los Partidos Políticos**. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda (orden del día 417). (Pág. 6719.)

10.—Apéndice:

- I.—Planilla de asistencia a las sesiones de la Honorable Cámara (mes de noviembre de 1964). (Pág. 6748.)
- II.—Planilla de asistencia a las sesiones de comisión (mes de noviembre de 1964). (Página 6751.)

—En Buenos Aires, a un día del mes de diciembre de 1964, a la hora 16 y 40:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Señor presidente: como entiendo que es posible reunir número suficiente para sesionar, y a fin de que esta reunión no se malogre, voy a solicitar que se continúe llamando durante media hora más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se continuará llamando.

—A la hora 17 y 10:

Sr. Bravo (H. F.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Héctor Bravo.

Sr. Bravo (H. F.). — Deseo que se informe cuántos diputados hay en la casa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En la casa hay 95 señores diputados.

Sr. Bravo (H. F.). — Ese número indica la posibilidad de sesionar a corto plazo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Así es, señor diputado.

Sr. Bravo (H. F.). — Sugiero, en consecuencia, que se siga llamando por media hora más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Art. 20.—La caja beneficiará al «ejecutante musical, entregándole las sumas acumuladas a su nombre por los aportes efectuados en concepto de antigüedad de la siguiente forma:

- a) A los 5 años el 75 por ciento;
- b) A los 10 años el 80 por ciento;
- c) A los 15 años el 85 por ciento;
- d) A los 20 años el 90 por ciento;
- e) A los 25 años el 100 por ciento.

Estos períodos comenzarán a computarse a partir del Registro del Ejecutante musical en la caja. En igual forma se computará la antigüedad para el pago de los salarios por enfermedad.

Art. 21.—El afiliado que haya retirado los aportes acumulados en concepto de antigüedad por despido, de acuerdo con la escala de que trata el artículo precedente y el que trata el artículo ..., no se le computará el período de tiempo que hubiere retirado. En consecuencia, comenzará a computarse una nueva antigüedad a partir de la fecha de percepción de esos fondos no implicando ello cancelar la antigüedad a los efectos jubilatorios.

—Queda a disposición de los señores diputados.

3

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.

Al Honorable Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad para comunicarle que, por decreto 9.464 del día de la fecha, ha dispuesto la promulgación de la ley 16.499, sancionada con fecha 8 de octubre del corriente año, por la que se incluye en los beneficios del artículo 4º de la ley 15.740 a diversos profesionales de la Secretaría de Estado de Transporte. Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.

Pedro Gervasio Fleitas. — Miguel Angel Ferrando.

—Al Archivo.

II

Comunicaciones del Honorable Senado

Comunica la nómina de los señores senadores designados para integrar la delegación del Congreso de la Nación que concurrirá a la primera reunión de delegados de los cuerpos legislativos de países latinoamericanos, a celebrarse en Lima el 7 de diciembre de 1964. (Al Archivo.)

—Remite en revisión un proyecto sobre recurso extraordinario. (A las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales.)

III

Dictámenes observados

1

Observaciones del señor diputado Bogliano al orden del día 417

Buenos Aires, 1º de diciembre de 1964.

Señor presidente:

En uso de la facultad establecida por el artículo 95 del reglamento, en tiempo y forma, vengo a proponer modificaciones al dictamen de las comisiones

de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda (orden del día 417) sobre la ley orgánica de los partidos políticos.

Propongo desde ya, lisa y llanamente, la supresión del inciso b) del artículo 3º y de los artículos 21 y 22 del dictamen en cuestión.

Al decir del eminente constitucionalista José Manuel Estrada, «toda la ciencia política está contenida en la idea de la libertad», en la que toda tesis finalista tiende a preservarla en el hombre y en el ejercicio de sus derechos substanciales. No es del caso respetar la libertad psicológica restringida sólo en el ámbito del fuero interno, sino que también —y por sobre todas las cosas— es el caso de garantizar y respetar la libertad política.

La ley orgánica sometida a consideración de esta Honorable Cámara tendrá que preservar en última instancia, de modo claro, cierto y serio, esa proposición, y si así no fuere, no cumpliría los altos propósitos que la determinan.

No obstante las intenciones del informe de mayoría, que admito y respeto —...este proyecto no contiene trampas ni segundas intenciones ocultas—; los artículos que impugno introducen expresiones de tipo subjetivo y se envuelven en el marasmo de una casuística que torna harto peligrosa la finalidad del respeto por la libertad del hombre que esta ley persigue.

Va de suyo, de acuerdo al principio constitucional —artículo 18 de la Carta Magna— que en modo alguno podrán evaluarse ni en el ciudadano ni en los partidos políticos, las ideas profesadas y la actividad política desarrollada hasta el presente.

Incumbe a este Parlamento de la proporcionalidad dar al país la ley que no admita discrepancias ni esconda subterfugios en el respeto por la libertad del hombre, y faltaba precisamente en esta Argentina contemporánea la decisión parlamentaria que recogiera en plenitud esta opinión con plena vigencia social.

No puede existir factor de poder, grupo de presión o de interés que altere o contravenga tan clara decisión de un pueblo que desde todos los ámbitos reclama ya esta decisión inexorable, a punto de haberla convertido en terminante dilema de opción: respeto por la voluntad popular o caos institucional.

Tres décadas fallidas, en marchas y contramarchas, concretan esta resultante incierta de la que debemos salir: triste experiencia de un pasado inmediato que deteriora nuestro acervo moral.

Oscar Alende en su *Tesis de la revolución nacional* ha puntualizado con seriedad este proceso: «Desde 1930 mentimos la democracia. Cuatro de cinco presidentes han llegado a la más alta magistratura merced al fraude y las proscripciones».

En nuestra posición y con sentido radical, no podemos admitir otra alternativa que no sea el más amplio respeto por la voluntad de la criatura humana, en cuanto a su decisión de elegir sus gobernantes como quiera hacerlo. Esta es la esencia moral de la Unión Cívica Radical Intransigente en la historia política argentina: «el hombre es un ser sagrado en cuya frente —decía Yrigoyen— lleva un rayo de la divinidad»; «el respeto de ese hombre en la comunidad del pueblo —apunta Gabriel Del Mazo—, el respeto de ese pueblo en la comunidad de las naciones, convierte la política en un fuero inmune y hace de ella una profesión de la más noble y entrañable que haya existido en el ideal y en la vida humana». «Hay que combatir —decía Alem— contra la insólita pre-

tensión de no dejar a los pueblos gobernarse por creerlos incapaces de regir sus destinos.

Debemos jugar con autenticidad, pues este Parlamento de la proporcionalidad concreta por primera vez la representatividad más auténtica del concierto social argentino y en modo alguno podremos admitir ya que el fraude o la proscripción legalizada reemplacen la suprema voluntad del pueblo.

Oscura fue aquella etapa del fraude, desgraciadamente varias veces repetida en nuestro historial, y desgraciada también ha sido la etapa de las proscripciones que no han dado hasta el presente solución valedera al destino político argentino. Nuestro presente y futuro aún inciertos, responden con elocuencia y algún día se hablará con imparcialidad de esta aberrante experiencia de esta época de curtos ideólogos, políticos frustrados y militares excedidos, que incluso, llegaron a invocar como solución la necesidad del voto calificado o la «dictadura democrática».

Debemos volver con seriedad y retomar el camino, pensando que no hay más verdad que aquella que se proclamó en el Jardín Florida en 1879 por la Unión Cívica de la Juventud: «Levantar como bandera el libre ejercicio del derecho al sufragio sin intimidación y sin fraude y condenar toda intervención oficial en los trabajos electorales.»

Nada que no sea auténtico podrá ostentar derechos inobjectables pues nada ni nadie puede transmitirlos mejores ni más perfectos que los que poseen.

Esta es la única forma en que se podrá obrar con autenticidad e, incluso, dar solución idónea a esta reclamación contemporánea sobre la necesidad de cambios de estructura, ya que no existe más autenticidad que la del pueblo mismo.

Si el pueblo quiere votar, dejémosle hacer su voluntad, como quiera y por quien quiera hacerlo que, para eso, es el soberano. Pero con una ley clara, limpia y sin subterfugios de ninguna especie.

Después, él construirá y transformará si así lo cree nuestras estructuras: su voluntad será la ley porque, como decía Martí, «donde el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio».

Por ello pido la supresión de los artículos que arriba menciono, porque en su síntesis entran la posibilidad de que esta voluntad sea desvirtuada, y eso no puede ser.

Palmiro B. Bogliano.

2

Observaciones y disidencias parciales formuladas por los señores diputados Alberto Serú García, David Jorge Casas, José Oscar Ruiz, Jorge D. Solana y Ruperto H. Godoy, al orden del día 417

Artículo 3º — Inciso b). Suprimirlo.

Artículo 6º — Reemplazar: «Justicia Nacional Electoral, por «Justicia Federal que a los fines de esta ley se denominará indistintamente Justicia Nacional Electoral.»

Artículo 15. — Agregar un apartado: 3) «En ningún caso se negará el reconocimiento por hechos anteriores a la vigencia de esta ley.»

Artículo 21. — Reemplazarlo por lo siguiente: «La declaración de principios, el programa o bases de acción política deberán acatar la Constitución Nacional, los tratados con potencias extranjeras, las leyes de la Nación y sólo podrán propugnar su modificación en la forma y modo que las mismas establecen.»

Artículo 22. — Suprimirlo.

Artículo 67. — Agregar... sin perjuicio del recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la

Nación procedente dentro de las 48 horas en que se haya notificado la denegatoria de la personería o la revocatoria de la sentencia que la acordara.

Artículo 84. — Incluir después de las palabras «decretos leyes», lo siguiente: «número 7163/62».

Artículo 85. — Reemplazarlo por el siguiente: «Por esta única vez todos los trámites, plazos y requisitos fijados por ésta y otras disposiciones legales y a los efectos del reconocimiento de partidos políticos, oficialización de listas de candidatos y demás requisitos que deberán satisfacerse ante las autoridades administrativas o judiciales para poder concurrir a las elecciones a realizarse el día 14 de marzo de 1965, podrán cumplimentarse hasta las 24 horas del día 14 de enero de 1965 si no se gozase de mayor plazo.

Alberto Serú García. — David Jorge Casas. — José Oscar Ruiz. — Jorge D. Solana. — Ruperto H. Godoy.

IV

Dictámenes de comisión

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En mayoría, con disidencias parciales, y en minoría, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo y en iniciativas de varios señores diputados sobre ley orgánica de los partidos políticos. (Al orden del día.)

V

Comunicaciones oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR:

Acompaña copia de los siguientes decretos:

Número 8.991/64. Promulgación de la ley 16.493. (Al Archivo.)

—Número 8.922/64. Promulgación de la ley 16.503. (Al Archivo.)

—Número 8.989/64. Promulgación de la ley 16.491. (Al Archivo.)

—Número 8.990/64. Promulgación de la ley 16.492. (Al Archivo.)

—Número 9.401/64 y resolución 861/64. Convocatoria a elecciones nacionales para el 14 de marzo de 1965, para renovar parcialmente la Honorable Cámara de Diputados. (Al Archivo.)

VI

Peticiones particulares

Décimo Congreso Argentino de Tisiología y Neumología: solicita subsidio. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)

—Asociación de Propietarios de Bienes Raíces de Misiones: acompaña copia de la nota que remitiera al excelentísimo señor presidente de la Nación relacionada con la ley de alquileres (A las comisiones de Legislación General y de la Vivienda.)

—Asociación de Idóneos Constructores de Córdoba y Asociación Propietarios de Bahía Blanca: solicitan la modificación de la ley de alquileres. (A las comisiones de Legislación General y de la Vivienda.)

—Vieyra, Rogelio, y Acuña, J. Azucena: solicitan la reforma de la ley de alquileres (A las comisiones de Legislación General y de la Vivienda.)

varios días que, por delgadez y consideración a esta Cámara vengo postergando el planteamiento de esta cuestión, ya que en todo momento se trabajaba sin número. Pero entiendo que ahora hay número en la casa y que no se puede dejar que esta cuestión se dilate más, porque me siento perfecta y verdaderamente afectado como que además señalé también afecta a muchos otros señores diputados, y quiero que se aclare este problema.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si se acuerda trato preferente a la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Murmis. Se requieren dos tercios.

—Resulta negativa de 65 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

9

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la consideración en general del orden del día 417 sobre Estatuto de los Partidos Políticos (1).

Tiene la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — Señor presidente: no son afortunados ni tampoco alentadores los precedentes que existen en nuestro país sobre estatutos o normas reguladoras de los partidos políticos. En cada una de las crisis institucionales que suceden a la de 1930 o, para ser más preciso, a raíz de la decisión del 4 de agosto de 1931 tomada por el gobierno provisional, en cada una de las crisis institucionales —repito— que ha padecido la República, se ha efectivizado el propósito de dictar normas estatutarias o reguladoras del funcionamiento de los partidos políticos argentinos.

En cada una de esas oportunidades en que, naturalmente, se había producido la quiebra de nuestro orden jurídico e institucional, la decisión o el designio de los vencedores determinaba que se estableciesen normas restrictivas para las fuerzas políticas desplazadas por los golpes de Estado que se produjeron a lo largo de más de treinta años de la vida nacional.

No obstante, a esta altura del proceso político argentino y de lo que es la evolución de la democracia en el mundo, no sería adecuado que nosotros tuviésemos algún reparo o alguna pre-

viencia para sancionar un estatuto regulador de la vida de los partidos políticos en nuestro país. De allí que los demócratas progresistas hayamos suscrito el despacho de la mayoría —que, sin embargo, algunas reservas nos suscita— en la inteligencia que contribuimos a la sanción de un instrumento imprescindible para la vida de la democracia y que va a prestar servicios eficientes para el desenvolvimiento de la vida pública de nuestro país.

Es claro que el partido político ha cambiado sustancialmente.

El partido político es, en verdad, un acontecimiento de nuestra época, de nuestro tiempo, del siglo XX. Por ello no aparece previsto como organismo, como instrumento de gobierno, como expresión de la voluntad de sector o de grupo en las normas constitucionales que nos rigen. Hasta 1850 los partidos políticos prácticamente no existían en el mundo, salvo alguna que otra manifestación que se produce en los Estados Unidos. Allí aparecen definidas las grandes líneas de los partidos políticos americanos en las figuras rectoras y eminentes de Jefferson, de quien se dijo alguna vez que por pensar en orden de libertad temía fundamentalmente al despotismo, y de Hamilton, de quien se señaló también que por pensar en el orden de lo que es la estabilidad y la seguridad en las instituciones, vivía siempre temiendo las consecuencias de la anarquía.

Es que todas estas Constituciones nuestras han sido en cierta medida el resultado de un proceso del constitucionalismo que encuentra su base doctrinaria en el pensamiento de los revolucionarios franceses de 1789. Los franceses, en aquellas circunstancias históricas, seguían la inspiración del pensamiento de Rousseau, que se oponía a cualquier intermediación entre lo que podría ser la voluntad del ciudadano y lo que podía llegar a significar la voluntad general, es decir, a todo lo que podía significar una verdadera interferencia entre la voluntad de la base y la decisión de la cima. De ahí que el partido político no tuviese jerarquía institucional, que no estuviese institucionalizado y que solamente apareciese como consecuencia de los acontecimientos históricos que se producen con posterioridad en todas partes del mundo.

¿Quién puede suponer a esta altura de los tiempos que existe alguna afinidad entre los partidos históricos argentinos con lo que es un partido político al promediar el siglo XX? Los viejos partidos argentinos, como los viejos partidos de todas partes, no se formaban como consecuencia de la aglutinación de personas en torno de un sistema o conjunto de ideas, en torno de un programa, sino como consecuencia de la captación de un hombre que seduce a las masas y que es capaz de determinar movimientos de otros hombres que lo siguen, en muchos casos hasta el campo de batalla, como hemos

(1) Véase el Diario de Sesiones del 30 de noviembre de 1964, página 6608.

visto en las luchas de las montoneras, de las que nuestro país tantas veces fue testigo.

Ni el Partido Federal, ni el Partido Unitario, ni aun los que vimos después como una prolongación de ellos en la evolución histórica de la vida argentina, nada tienen que ver con la realidad impuesta posteriormente por la evolución política institucional, que nos alcanzó a nosotros, los argentinos, como expresión de la evolución mundial de la democracia, que adquiere ya caracteres distintos a los que tenían aquellos grupos humanos que se canalizaban en partidos y que seguían al jefe o a la divisa, que generalmente era un pendón para el combate.

Cabe una observación. Si en los orígenes los grupos políticos fueron el resultado de la seducción del jefe, a la vuelta de los hechos y como un fenómeno de nuestro tiempo, aparece también en algunas manifestaciones, del tipo de los nacionalismos y totalitarismos, la influencia del jefe único indiscutido, con un poder que se denomina carismático, cuya voluntad omnímoda y poderosa impone su ley, no solamente al partido, sino al mismo Estado, al que se lo asimila con el partido que se ha convertido en único.

Pero es muy distinto el partido único al partido político que hace a la esencia misma de la democracia denominada pluralista, de la que es un instrumento indispensable. Este partido se organiza y estructura sobre la base de ideas, de programas, a veces como expresión de intereses, a veces como expresión de una concepción filosófica del mundo y de la vida, a veces como resultado de una concepción de tipo religioso.

Este tipo de agrupación humana que denominamos, con el sentido actual y occidental, como partido político, es un instrumento esencial de la vida de la democracia. ¿El Estado puede permanecer, entonces, al margen, indiferente, en el momento en que él representa, como dice Burdeau, a la «democracia gobernante», con un intervencionismo que alcanza a todas las manifestaciones de la vida colectiva? ¿Puede permanecer indiferente, impávido, cruzado de brazos, frente a las manifestaciones esenciales y vitales para el desenvolvimiento de la existencia colectiva que alcanzan estos grupos humanos que denominamos partidos políticos? Evidentemente no, señor presidente. De ahí que el Estado tenga el derecho, la obligación y hasta el deber de regular la conducta, la forma de desenvolverse, las condiciones elementales para que, dentro del orden jurídico preestablecido, estas organizaciones cumplan con la finalidad que les compete en la democracia.

Esto sea dicho desde un punto de vista general y, en nuestro concepto, es lo que justifica la intervención del Estado para la estructuración y la regulación de la vida de los partidos poli-

ticos. Tal vez el partido político sea un puente que tiende la democracia moderna entre lo que es la voluntad de la sociedad y del pueblo, voluntad que se manifiesta mediante esos órganos que son la expresión de su pensamiento, de sus intereses, de sus actitudes en la vida colectiva.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Muniagurria. — El proyecto que está considerando la Honorable Cámara evidentemente tiene características de un reglamentarismo notorio. Hemos suscrito el despacho tal vez con algunas reservas de tipo mental, puesto que no dejamos de admitir que un excesivo reglamentarismo no fomenta ni facilita ciertamente el desenvolvimiento real de lo que debe ser la agrupación política en la vida de una democracia de nuestro tiempo. No obstante, entendemos que este estatuto va a ser un instrumento de progreso y de mejoramiento para nuestras costumbres públicas.

En este momento los partidos políticos adquieren una significación creciente. Nadie ignora que uno de los fenómenos típicos de nuestro tiempo es el de la existencia de los denominados grupos de presión, grupos de tensión o de interés. Está aceptado que en la medida en que los partidos políticos afirman su existencia, su vigor y su preponderancia, disminuyen la influencia y las posibilidades de actuación de esos grupos de presión o grupos de interés. Así se anota, por ejemplo, que esos grupos de interés o de presión son relativamente débiles en Inglaterra, donde existe la consistencia casi monolítica del sistema bipartidista de los grandes grupos en que se divide la opinión inglesa. Son, tal vez, más fuertes en Francia, donde los grupos políticos, si bien no presentan el sistema del bipartidismo inglés, adquieren, por su consistencia ideológica, una gran significación en la vida política de la República Francesa. En cambio, adquieren una mayor preponderancia en los Estados Unidos de América, donde si bien es cierto que rige el sistema bipartidista propio de los países sajones, la inconsistencia ideológica, la falta de una enjundia doctrinaria —para calificarla así— de los dos grandes partidos que dominan la escena pública de la vida de Norteamérica permite, en cambio, la acción gravitante y progresiva de esos grupos de presión que contribuyen a orientar las decisiones del poder político. Tanto es así —y valga la referencia—, que esos grupos de presión, como no lo ignora la Honorable Cámara, aparecen debidamente regulados por la legislación, a los fines de que la actuación que pueda cumplirse por parte de los gestores o delegados de esos grupos de interés o de presión pueda estar establecida y hecha pública mediante la inscripción en registros especiales.

Sr. Gómez Machado. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Muniagurria. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Gómez Machado. — Lo escuchaba con mucho interés al señor diputado, especialmente cuando desarrolló la ingeniosa teoría del fortalecimiento de los grupos de presión en aquellos medios en que el bipartidismo es la expresión política usual; pero advierto que casualmente en Italia y en Alemania los grupos de presión se institucionalizaron con el corporativismo, es decir, en tres repúblicas que se caracterizan por el pluripartidismo. Esta es sólo una acotación.

Sr. Muniagurria. — Deseo aclararle al señor diputado mi afirmación. Los grupos de presión aparecen disminuidos en su eficacia, no como consecuencia del bipartidismo, sino del fortalecimiento de los partidos políticos.

No he señalado que sólo sea el bipartidismo un determinante de la disminución de la influencia o de la gravitación de los grupos de interés. Por el contrario, le diré al distinguido señor diputado por Santa Fe que la apreciación y el ingenio no son míos, porque lo señala un autor español muy conocido como una observación de derecho público. La afirmación, concretamente, consiste en lo siguiente: en la medida en que el partido político afirma su existencia, el grupo de presión desaparece en su eficacia.

Sr. Gómez Machado. — La sociología contemporánea de los Estados Unidos elabora la tesis a que alude el señor diputado y que yo considero ingeniosa, pero no eficaz; pero advierto que al margen de la función de los partidos políticos los grupos de presión, los grupos de interés, acaso los factores de poder, existen como realidades sociales, que no van a desaparecer sino que tienden a coexistir con los partidos políticos.

Entiendo que el perfeccionamiento de los partidos políticos reside en su autenticidad, es decir, en la medida en que su representatividad está interpretando el sentir nacional. Pero advierto, también que la coexistencia de los partidos políticos con los sectores de interés, con los grupos de presión y acaso con los factores de poder es útil y necesaria en la vida moderna. Lo que no se puede admitir es que un factor de poder quiera convertirse en una superestructura constitucional que imponga decisiones al margen del juego natural de las instituciones.

Sr. Muniagurria. — En líneas generales estamos de acuerdo.

Quiero complementar su anotación, tan útil al esclarecimiento de nuestras ideas recíprocas, señalando que en los Estados Unidos, país que acaba de mencionar el señor diputado, la realidad de los grupos de interés o de presión alcanza tanta significación que están institucionalizados; y tanto lo están, que en el artículo 307 —que iba a leer cuando me hizo su amable interrup-

ción el señor diputado Gómez Machado— de la ley calificada como *Lobbying Act*, se establece que será necesario que se inscriba en un registro especial todo aquel gestor que realice una actividad destinada a obtener, mediante precio, la aprobación o desaprobación de cualquier ley del Congreso, directa o indirectamente. Es decir, que esa realidad de los grupos de presión está captada, está institucionalizada por la legislación.

En nuestro país tenemos grupos de presión, grupos de tensión, grupos de intereses, factores de poder. ¿Para qué nombrarlos, cuando todos los conocemos? ¿Está, acaso, en nuestros hábitos políticos, en nuestra tradición, la institucionalización de esos sectores y de esos grupos, como ocurre en los Estados Unidos? De allí que yo me haya hecho la pregunta, señor diputado, cuando hemos estado tratando en comisión el Estatuto de los Partidos Políticos, de si no era tal vez oportuno tomar en consideración la legislación extranjera, para sacar de ella lo que pueda ser un adelanto o un progreso y la conveniencia de considerar este hecho característico y típico de nuestro mundo contemporáneo. Me refiero a legislar e institucionalizar el grupo de presión. Y he llegado íntimamente a la conclusión de que ello no está dentro de nuestros hábitos y de nuestras posibilidades. Por tanto, allá esa legislación americana, con realidades que trascienden, que se hacen más notorias, que determinan proyecciones en las actitudes del ente político, que van más allá, sin duda, de las que pueden producirse entre nosotros y que serán un antecedente útil, para que el día de mañana, en una evolución de nuestros hábitos y de nuestras costumbres, podamos recoger la experiencia que han vivido otros países mejor o peor evolucionados en esa materia.

Además, yo querría anotar en el momento en que se produce este breve diálogo un hecho significativo. Así, y continuando con el tema de los grupos de presión, diré que ellos actúan con mayor eficacia en los grandes partidos políticos, mientras que la proporcionalidad, la distribución política de los distintos sectores que pueden integrar la vida cívica de un determinado país, resta gravitación, influencia y eficacia a la preponderancia que esos grupos de presión pueden tener. No es lo mismo, ciertamente, incidir por la presión, por la tensión, por la gravitación de los intereses sobre un determinado grupo, que, a su vez, tiene la capacidad de decidir sobre la marcha del Estado, que tener que distribuir la incidencia de esos factores en un grupo diseminado y que constituye una verdadera proliferación de las manifestaciones, en definitiva, de la opinión pública.

Dentro de este orden de ideas quiero señalar también que si bien es cierto que en este país, como en muchos otros, se ha tenido la aspiración de alcanzar el sistema denominado del bipartidismo —las dos grandes fuerzas que se alternan en la oposición y en el gobierno—,

también es cierto —no obstante que la ley Sáenz Peña así lo preveía— que la realidad es que aparezcan y proliferen otros sectores y otras fuerzas políticas que no encontraron la posibilidad de canalizarse en los grandes rumbos de las corrientes mayoritarias de opinión. Así, en este país, donde desde 1912 en adelante, y sin hacer distingos ni matices, vimos el enfrentamiento del radicalismo con los grupos conservadores, y viceversa, ya en nuestra época y en nuestro tiempo —y lo está demostrando la composición de esta Cámara— aparecieron grupos y matices de otras manifestaciones del pensamiento, de los intereses, de las aspiraciones, de los ideales de sectores que integran la comunidad argentina, para darnos el cuadro de lo que es una realidad típicamente latina, a nuestro juicio, ya que cabe la identificación del sistema bipartidista con los países sajones, como Inglaterra y los Estados Unidos.

Esto me lleva, señor presidente, dentro de lo que es una exposición de corte general, propósito que me alienta en este debate en la Cámara, a señalar que puede darse una real paradoja: es la de que el temor que los adversarios de la proporcionalidad han tenido como argumento contrario al sistema, en el sentido de que pueda provocar y ser un factor determinante de la atomización de los partidos políticos, aparece conjurado en gran medida por una sabia disposición contenida tanto en los despachos de mayoría como en el de minoría que estamos considerando. Me refiero a las alianzas, que en cierto modo son consustanciales con el principio de la proporcionalidad en la representación parlamentaria. Las alianzas que facilitan el acercamiento y que eventual y paradójicamente, actuando dentro del sistema de la proporcionalidad, pueden determinar la aglutinación, el acercamiento y, tal vez, la fusión de muchas fuerzas que no alcanzarían a ser interpretadas debidamente por esos dos grandes corrientes de opinión que actuaron bajo el sistema de la lista incompleta o de la denominada ley Sáenz Peña.

Nosotros hemos formulado algunos reparos de importancia relativos al contenido del despacho de la comisión. Insistimos precisamente en este aspecto de las alianzas y también en lo que se refiere a la no obligatoriedad de la afiliación para la proclamación como candidato dentro de un partido determinado.

La historia política argentina esta hecha de realidades. A nadie se nos oculta ni se nos escapa que las alianzas han contribuido en muchas oportunidades a la realización de movimientos civilizadores en la política nacional y, eventualmente, a la constitución de algunos gobiernos que han podido significar soluciones para momentos difíciles de la vida de la Nación.

En cuanto al no requerimiento de la afiliación a un partido determinado para que éste pueda

proclamar un candidato a cualquier cargo electivo, también es cierto, y la realidad actual y reciente nos señala que en más de una oportunidad partidos de antigua data, de gran significación, han llevado a las posiciones más eminentes, como candidatos, a figuras que no tenían militancia dentro de sus propias filas, como un reconocimiento a sus grandes prestigios ciudadanos y a lo que ellas han representado en la vida cívica del país.

Esas dos disposiciones que contiene el estatuto han contado con nuestra decidida colaboración, y vamos a contribuir también a que sean sancionadas por la Cámara.

Yo no quiero hacer un discurso muy extenso; pienso que la partidocracia —valga el neologismo— es el signo de la democracia moderna. El partido no es un invento del siglo XX, como partido único, sino el partido como agrupación, como organismo político. El partido como expresión de la voluntad de grandes sectores de la vida del país y de todos los países, es el instrumento de la evolución, del progreso, del mejoramiento para desenvolverse dentro de las instituciones, para evitar el desborde de la violencia, para evitar todo lo que pueda representar el riesgo del cambio de las instituciones por la revolución violenta.

El partido político es así un instrumento de la democracia, y la mejor manera de defenderla es sancionar una ley que regule sus actividades, que constituirá en definitiva la verdadera ley de defensa de la democracia. Será el instrumento que contribuya a que los partidos políticos actúen dentro del orden de la democracia, para que ellos, con una proclamada fe en las instituciones, en los principios que hacen a la esencia misma de este sistema incomparable que es la democracia, puedan desenvolverse para alcanzar fórmulas de elevada convivencia en el orden social, en el orden político y en el orden económico.

¿Acaso es indispensable o necesario que para transformar una democracia meramente política en una democracia social se llegue al golpe de Estado, a la subversión o a la revolución social misma? ¿Acaso los partidos no pueden actuar y desenvolverse para alcanzar dentro del orden jurídico preestablecido una evolución que comporte progresiva efectividad en las relaciones de convivencia y a la luz de las concepciones más modernas y actuales de lo que es la relación de la vida entre los hombres?

Nosotros estamos convencidos de que dentro del orden democrático todas las posibilidades de mejoramiento y progreso están abiertas. No somos, no hemos sido revolucionarios en el sentido de lo que pueda comportar una modificación sustancial de nuestras estructuras; pero aspiramos a perfeccionarlas, aspiramos a actualizarlas, aspiramos a modernizarlas por la vía de la evolución y del progreso.

Recuerdo que en alguna oportunidad, en el Senado de la Nación, el doctor de la Torre, entonces senador por Santa Fe, señalaba: «Como no he rendido mis ideas liberales y evolucionistas a nada ni a nadie, mantengo incólume mi fe en las instituciones democráticas. Creo solamente en el gobierno de la opinión pública, y cualquier manifestación que se traduzca en un gobierno de fuerza, venga de donde viniere, de la derecha o de la izquierda, me provoca la sensación de un ultraje que lastima mi sensibilidad de hombre libre.»

Nosotros alentamos esas mismas concepciones, y nuestro partido considera que con la sanción de este instrumento de régimen legal de los partidos políticos la democracia argentina podrá afirmar su desarrollo desenvolviéndose para alcanzar su plenitud, en la inteligencia también de que, desde que este sistema político se funda en principios tan nobles y tan elevados como la solidaridad humana, la libertad y la igualdad entre los hombres, no puede ser comparado ni sustituido por ninguno, porque es en verdad la culminación del proceso de la humanidad en la búsqueda de sus mejores destinos, y solamente lo afirmaremos en la medida en que podamos alcanzar la efectiva realización de esos altos principios. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: indudablemente, este debate es, o debe ser por lo menos, de alta trascendencia para el futuro de las instituciones políticas fundamentales del país. De este debate surgirá claramente si existe o no una voluntad común de integrar el cuerpo electoral de la Nación, de abrir o romper los diques que hasta hoy han condicionado la libre expresión de la voluntad popular.

No voy a hacer la historia de los partidos políticos, que ya ha sido hecha en lo que va del debate, ni me voy a referir a sus orígenes, a su formación, a su distinta organización o disciplina, ni a los sistemas bipartidistas pluralistas. Simplemente voy a sentar algunas ideas para que sirvan de evidencia del pensamiento que nos inspira en esta cuestión.

Los partidos políticos son para nosotros órganos esenciales para la expresión de la voluntad ciudadana. Encauzan ideales que canalizan a través de hombres y son expresión de modos de ser o de sentir de partes de la colectividad nacional. He dicho de partes, pues la expresión partido está diciendo por sí que ninguno de ellos puede aspirar a expresar la totalidad de las aspiraciones, de los intereses y de las motivaciones que mueven a los distintos sectores de la comunidad nacional.

Tampoco pienso que en una democracia orgánica y vital los partidos políticos sean la única expresión natural y necesaria de los intereses de la comunidad. Creo, sí, que tienen su

propio ámbito fijado y que sirven fundamentalmente para canalizar y expresar ideas, para contribuir a organizar las instituciones del Estado, para hacer gobierno desde esas instituciones al servicio del bien común, porque hay otras fuerzas, otra expresión de sociedades intermedias entre el individuo y el Estado que aquí han sido mencionadas y que tienen, por cierto, en nuestra denominación una importancia vital también para expresar modos particulares de ser y de sentir de la comunidad nacional.

Son las fuerzas del trabajo, de la producción y de la cultura y la expresión de las organizaciones familiares argentinas. Son las sociedades intermedias —lo repito— entre el individuo y el Estado, que expresan intereses particulares, pero vitales de la comunidad nacional.

Al partido político le compete buscar las formas y los modos de entrelazar, compensar y unir los intereses contrapuestos de las distintas expresiones de la vida nacional.

Pero las fuerzas que son expresiones de sociedades intermedias tienen también un papel fundamental que desempeñar en el desarrollo de una democracia moderna y orgánica. La concepción liberal de la vida, surgida de la gran revolución cumplida, que el liberalismo hizo nacer en el mundo, creó algo así como la entelequia del ciudadano, creando al mismo tiempo una expresión y una figura que dividía al hombre en hombre y en ciudadano, y contribuyó a afianzar las fuerzas de expresión política, a través de las cuales los ciudadanos tienen posibilidad de gravitación en la vida nacional.

Pero el hombre, antes de ser ciudadano es hombre. Se expresa en mil manifestaciones de la vida diaria como docente, productor, obrero, artista, industrial, campesino. Tiene mil formas de expresión a través de las cuales quiere gravitar y hacer sentir sus modos particulares de ser, de desenvolverse en la sociedad en la que le ha tocado vivir.

Nosotros pensamos que los partidos políticos son órganos esenciales y naturales para la expresión de la voluntad ciudadana. No son la totalidad de la Nación, de la misma manera que no lo son los gremios, porque una nación no es un gremio, ni un conjunto de gremios; reconoce otras anterioridades, otras particularidades y otro cúmulo de intereses, tradiciones y fuerzas espirituales. Pero pienso que, así como a los partidos políticos les está reservada la función de expresar corrientes de pensamiento, ideas para la organización del Estado y de la sociedad, a las otras sociedades intermedias —concretamente de la Argentina— les está reservado el derecho de expresar sus intereses, de hacer gravitar sus aspiraciones, de encontrar modos naturales de expresión, que algún día plasmaremos con la representación en cuerpos colegiados de esas sociedades intermedias, que evidencian también modos vitales de sentir de la comunidad nacional.

En definitiva, con esto quiero decir que en este problema, como en todos los que son vitales y que hacen a la organización de la sociedad argentina, a la democracia cristiana la inspira una particular filosofía, que debe inspirar toda postura y todo proceso y que, en nuestro caso, es la filosofía de la participación, que es como decir la filosofía de la justicia social, que es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Desde que el hombre vive en sociedad, se encuentra frente a una suma de derechos y obligaciones pero, fundamentalmente, frente a un cúmulo de necesidades humanas que debe satisfacer. En una democracia orgánica el hombre debe tener el derecho a expresarse en las distintas manifestaciones que adquiere su modo y sus condiciones de vida en la sociedad.

Por eso, a nosotros no nos asusta y, lejos de eso, nos alegra el avance y la incorporación a la vida de la sociedad argentina de otras fuerzas que no sean solamente los partidos políticos. Estamos ciertos de que hay que lograr el encuadre necesario para que ninguna de las fuerzas a las que les compete una función determinada desborde de su cauce natural. Ni los gremios hechos partidos políticos, ni tampoco los gremios aherrojados, privados de participación en la vida argentina; partidos políticos en la conducción de los asuntos generales del Estado, gremios y expresiones de la producción y de la cultura en otros organismos, integrando vitalmente una sociedad moderna que rompa con las tradiciones, con la organización del sistema liberal, y haga cierta una sociedad personalista y comunitaria. Personalista, por exaltadora de la dignidad del hombre; y comunitaria, por haberse dado a organizar los canales que posibiliten, en la vocación comunitaria del hombre, es decir, en su aspiración para enlazar sus intereses y asociar sus esfuerzos con otros hombres, los organismos adecuados para expresarse con plenitud.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Palmiro B. Bogliano.

Sr. Vedia. — Cuando se habla de las instituciones fundamentales del país, con las cuales tanto se llena la boca, hay que decir que ellas se salvarán, en lo que de fundamental tienen, en la medida en que seamos capaces de impulsar, con un pensamiento y una decisión revolucionarios, un proceso de transformación que integre la democracia meramente política, que el liberalismo pretendió imponer a la organización de la sociedad argentina, para llenarla de contenido vitalmente social y de plenitud de realización económica, personal y general. Esa es la filosofía de la participación, que a nosotros nos inspira —repito— en esta materia vinculada a una ley orgánica de los partidos políticos, ley orgánica que en definitiva viene a reglamentar el derecho anterior consagrado

por la Constitución Nacional de asociarse con fines útiles. Los partidos políticos pueden ser asociaciones útiles para el gobierno de la comunidad argentina.

Por cierto que ni esta ley ni ninguna otra tendrá por sí misma la virtualidad de corregir otros defectos, vicios o males que atacan desde adentro y desde afuera a los partidos políticos. En la medida en que estas fuerzas organizadas, de disciplina interior, no sean expresiones de pensamientos espirituales con aptitud para dar respuesta a los problemas concretos del país estarán trabajando por su propia disolución y desaparición. En la medida en que caigan en los reiterados vicios en que tantas veces cayeron los partidos políticos argentinos, y muy principalmente en la deformación del partidismo que significa identificar al partido con los intereses de la Nación, en virtud de lo cual se llega a la administración pública para hacer gobierno con la gente del partido porque es la única que garantiza el cumplimiento del programa trazado; en la medida en que los partidos caigan en el partidismo, que los desnaturaliza, los corroe y los corrompe, estarán trabajando por su propia disolución, porque la democracia es difícil que muera por los ataques exteriores; por lo general, muere por los vicios que se generan en su propia constitución, muere por dentro. La democracia muere por la incapacidad para salvar a tiempo lo que de vital y fundamental tienen las instituciones que nos dieron organización republicana y democrática; mueren por mantener métodos o instituciones obsoletos, pues al no renovarse a tiempo las propias instituciones se abre el camino a cualquier aventura totalitaria.

Todos los partidos políticos tienen, a nuestro juicio, una función fundamental que cumplir en la vida del país. Pero reitero que habrá de producirse en ellos mismos, como en el país todo, una previa revolución moral, una revolución en las mentes, que de una vez por todas nos impulse a actuar limpiamente, a enfrentar con verdad y con coraje la problemática nacional a fin de ser instrumentos eficaces para la orientación del pensamiento colectivo. De lo contrario, nuevamente horas inciertas serán paradas a la incipiente democracia que todavía es la organización política argentina.

Es verdad que echando una mirada hacia atrás los precedentes y antecedentes históricos del país no autorizan a exagerados optimismos. Por cierto muchos partidos políticos argentinos en lugar de servir de instrumentos de orientación del pensamiento colectivo, en lugar de ser tribunas de ideas y de ideales, en lugar de esbozar claros programas de gobierno, fueron, en ocasiones, máquinas electorales para el asalto al poder público, fueron expresión de bando, de sectarismo, de facción excluyente de otros sectores de la vida argentina. Fueron también muchas veces trabajados por las deficiencias que

están en el fondo de la estructura humana del hombre y no fueron a tiempo capaces de corregir los vicios orgánicos de su propia constitución para encontrar soluciones que permitieran darle al país fuerzas políticas vigorosas y orgánicas para hacer también vigorosa y orgánica a la democracia argentina.

La historia de la democracia argentina está íntimamente vinculada con la historia de los partidos y del sufragio. El país eligió formalmente, en 1853, el sistema republicano y representativo, pero, desde entonces, los usufructuarios del régimen liberal comenzaron a empeñarse para inventar o descubrir trampas que desvirtuaran en los hechos los derechos proclamados por la Constitución. Así sucedió con la lista completa, con los acuerdos de lista, con el voto cantado, con los arcos de peonadas para sufragar, con las policías bravas, con la destrucción de las urnas, con la coacción y la obstrucción electoral. Contra este proceso de corrupción se levanta entonces el radicalismo, que después de veinticinco años de lucha y abstención revolucionaria obtiene de un presidente lúcido, realista y generoso la consagración del voto universal, obligatorio y secreto. Sube entonces al poder el primer presidente popular que conoce el país, Hipólito Yrigoyen. Pero después de la caída de este presidente recrudece el fraude, instrumento de la dominación conservadora, instaurado a veces a través de formas aparentemente más civilizadas, pero no por eso menos hipócritas. Esa década tiene un nombre en el juicio popular.

En 1946 el pueblo vota nuevamente, y vuelve a gobernar, como había pasado antes con Hipólito Yrigoyen. Se inicia un proceso con muchos errores, con muchos desaciertos, pero, también, con muchos aciertos, durante el cual el pueblo gobierna, y las masas populares se sienten partícipes de la vida nacional.

Después de 1955, frustradas las nobles intenciones del jefe de la revolución, la voluntad popular es nuevamente marginada de la vida nacional. El liberalismo copa nuevamente los resortes del poder. De la violencia originaria de nuestra historia política, el fraude refinado posterior —el llamado «fraude patriótico»—, se llega a un nuevo invento para frustrar la voluntad popular: la política de las proscripciones. Esta política se inicia en 1955.

En 1957 se produce la paradoja de la convocatoria a una Convención Reformadora de la Constitución sin que pudieran participar de ella precisamente quienes habían sido los artífices de la reforma de esa Constitución de 1853. En 1958 sube al gobierno Frondizi, montado sobre las proscripciones, pero prometiendo que ésta sería la última vez. Sin embargo, en 1960 siguen proscritos vastos sectores populares del país. En 1962 un ministro le hace creer, o cree hacerle creer a su presidente que es más popular de lo que es y puede ganar; se da entonces libertad

electoral, pero con el acuerdo y la convicción previa de que si no ganase el oficialismo se volvería a la situación anterior al 18 de marzo. Entonces, se intervienen las provincias donde triunfa el justicialismo y se anulan las elecciones. El 7 de julio, para ahorrar comentarios a cada una de estas negras etapas de la política argentina, se montan nuevamente las proscripciones y se pretende embretar a las mayorías en un frente espurio y traidor del programa y de la causa nacional.

Y bien, señor presidente; hoy estamos ante un proyecto de estatuto que no asegura, no termina de asegurar, que esta larga historia se terminará; por el contrario, tiene, en algunas de sus cláusulas disposiciones que hacen de este instrumento lo que yo llamaría el estatuto de la desconfianza. Otra vez las fórmulas sibilinas, otra vez las fórmulas que, sin destinatario preciso, pueden caer mañana sobre cualquier fuerza política que no sea del gusto de la facción gobernante, no le hago cargo al radicalismo del pueblo de que quiera proscribir, ni tenga tal intención. Pienso en voz alta, y se me ocurre que muchos seguimos trabajados por una gran desconfianza en la intuición y en la voluntad popular para expresarse en la vida política del país.

Creo que en este orden de cosas —algunas veces lo hemos dicho desde estas bancas— hay dos tipos de prevenciones: la de los que con alguna legitimidad pudieran mantener reservas de temor, de miedo, y de desconfianza en la irrupción de tal o cual sector político, movidos por anterioridades que en su hora constituyeron episodios de arbitrariedad y de desgarramiento nacional, pero, en definitiva, temores, miedo, desconfianza en el buen juicio popular, desconfianza en las reservas morales que están contenidas en el alma de las grandes mayorías populares del país. Hay otros prevenidos que impulsan este tipo de normas y que han establecido, a lo largo de la historia política del país, este tipo de disposiciones que hoy son reservas de desconfianza y mañana pueden ser otra vez instrumentos de proscripción, de discriminación, de exclusión entre los argentinos.

Estos son los pregoneros del pensamiento liberal, éstos son los que todavía se mueven en torno a valores de un país que murió, de un país que ha sufrido tremendos cambios en este proceso de aceleración de la historia, de un país que ha incorporado como factor protagónico fundamental y definitivo en el rumbo futuro de la República a las fuerzas del trabajo, a los hombres todos, excluidos hasta hoy de participación en la vida política, social y económica de la Nación. Son los diques, son las reservas que el régimen liberal pone para detener el proceso de avance de los protagonistas de la historia, de las fuerzas del trabajo, que en la medida en que se incorporen a la vida

cívica del país y en la medida en que a través de su incorporación a la misma promuevan otros modos de representación, consejos económicos y sociales o cualquier organismo de este tipo, irán derribando privilegios, arbitrariedades, destruyendo las causas de fondo del mal-estar nacional que radican principalmente en una arbitraria, injusta, antihumana organización económica y social de la cual la estructura política no es sino el sustento, el sostenimiento.

En el fondo de todo esto, no obstante tratarse de un estatuto de partidos políticos y de parecer una materia puramente política, subyace un hondo y profundo problema económico y social. Este es un instrumento, una herramienta para que los distintos sectores de la vida política del país tengan un medio de expresión. ¿Pero como puede esperarse que los problemas de fondo, los problemas derivados de estructuras caducas e injustas, de una arbitraria e injusta distribución de la renta nacional, de un injusto régimen jurídico de la tierra y de una injusticia estratificada en la actual organización legislativa, económica y social argentina, habrán de modificarse y reformarse si quienes sufren sus consecuencias, no obstante el aporte y el esfuerzo que rinden todos los días a la vida del país no tienen posibilidad de mover las palancas de transformación, una de las cuales, fundamental y vital, es el Congreso de la Nación, caja de resonancia del pensamiento colectivo e instrumento que debiera ser de esa transformación de fondo?

Yo reitero, señor presidente, que son dos los tipos de mentalidad que traducen estas nuevas formas de reserva y de temor. Felizmente, creo que quienes son los detentadores del privilegio de la sociedad liberal y capitalista, cuna y madre del comunismo y de todo proceso de descontento social, van siendo los menos, porque este país cristiano, pacífico, generoso, de hondo sentido nacional, aunque no tenga capacidad para elevarse a la altura de las concepciones económicas, intuye en el fondo de su alma que el problema argentino no va siendo ya un simple relevo de cuadros o de hombres, sino una exigencia mucho más perentoria y profunda de calar hondo en la organización económica y social para remover las causas del malestar nacional.

Yo digo que van siendo cada vez más los con-
testes con esta apreciación del proceso histórico que vive nuestra nación, y tengo confianza, la tengo, incluso, en este debate para poder convencer y hacer un esfuerzo todo lo más afectuoso y fraternal que pueda para despejar temores y dudas, y para borrar con todo este tipo de normas que continuarán prostituyendo la vida argentina, porque de ser sancionadas tal vez no sean usadas en marzo, pero puedan serlo por el gobernante de turno, por lo que, en

definitiva, estarán obrando como un factor de perturbación permanente en la vida política del país.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Vedia. — ¿Pero quiénes de nosotros podemos tener garantías de una libre y normal actuación? Cuando se nos habla de este estatuto, para dar sólo un ejemplo, de que es violatorio del régimen democrático —la palabra democracia sirve para todo— la promoción, especialmente, es decir, cheques en blanco para la aplicación de las medidas que correspondan de los siguientes hechos o actos: yo nombro solamente el primer apartado: «concentración del poder político, social o económico». ¿Pero acaso el proceso universal no va mostrando que es casi natural y lógico, exigido por la complejidad de la vida moderna, la concentración del poder económico? ¿Qué son las grandes empresas del Estado? ¿Qué es YPF o YCF? ¿Y concentración en quién? ¿En qué? ¿A qué va dirigido esto? ¿Quién propugna, como han hecho otros sectores de la vida política del país, la nacionalización de las fuentes de la energía está incurso o no en esta concentración del poder económico?

Claro; cuando algo se quiere poner para reservarse un instrumento que pueda ser mañana una coacción, algo hay que poner. Creo que aquí ha faltado hasta la buena técnica legislativa que impone claridad en la expresión de las normas.

Nosotros, frente a este estatuto y luego de esta exposición de ideas, que no por generales dejan de tener importancia para clarificar nuestro pensamiento y nuestro juicio en torno a esta materia, decimos que hemos suscrito el despacho de la mayoría en la inteligencia y en el deseo de dar finalmente un instrumento que regle la vida política de las agrupaciones cívicas. Esto no nos gusta, y nosotros hubiéramos hecho otra cosa: un instrumento muy sencillo destinado a asegurar normas de vida democrática interna, el pluralismo partidario, el respeto de los derechos de los demás, el contralor de fondos.

Creo que el primer pecado de este estatuto está en su excesivo reglamentarismo, ya que se imponen normas excesivamente complejas y complicadas que, a mi juicio, no facilitarán la organización y el funcionamiento de los partidos. Pero, fundamentalmente, nuestra disidencia, con ser parcial, radica en normas como las del artículo 22 del proyecto, que abre dudas sobre si el país va a enfrentar un proceso limpio, sin exclusiones de toda naturaleza, viviendo los riesgos de la ventura de la libertad, que es, en definitiva, uno de los valores fundamentales de la nacionalidad argentina, pero haciendo también verdad el valor de la justicia, que es otro valor fundamental en las aspiraciones de la inmensa mayoría del pueblo.

Quiero saber si el país va a vivir este proceso en plenitud de libertad o si vamos a seguir constreñidos por estas armas que son expresiones de miedo, de temor y de desconfianza, a las que algunos ingenuamente concurren para consolidar o para servir los intereses de otros que, reitero, están levantando con esto diques a un proceso de transformación al que, si no le abrimos las vías naturales de la organización política, irrumpirá por otras vías, y no por la de la revolución pacífica, la revolución que venga a integrar al hombre, que venga a cumplir con lo que no cumplieron las dos revoluciones que desintegraron al hombre, la liberal y la marxista, que permita que se haga la síntesis de justicia y de libertad que torne posible un auténtico logro de la comunidad nacional argentina.

Si no abrimos estas válvulas, si no estamos alertas para percibir el sentido, el ritmo y el tono de los tiempos que corren; si no hacemos una expresión de confianza en la democracia, y por cierto también en las otras instituciones que nos rigen y que incluso nos dan el derecho y los recaudos para caer contra quien delinque después en la vida cívica del país; mientras no expresemos y plasmemos en hechos concretos este acto de confianza, estaremos creando condiciones para que la revolución pacífica, la revolución que puede hacerse dentro de los cauces institucionales, irrumpa por otras vías, y entonces ya no se destinará a consagrar derechos legítimos, sino que, como toda revolución violenta, llegará con sangre y con desborde.

No es, por cierto, por temor a que esto suceda, sino por una razón y una íntima vocación de justicia y de amor al país que nosotros queremos hacer justicia y libertad, y queremos rejuvenecer, remozar y salvar la fecundidad de las instituciones fundamentales del país a través de la oportuna reforma que en ellas introduzcamos, haciendo una sociedad de hombres libres, de hombres justos, donde no exista el miedo o el temor; de hombres que marchen unidos hacia la oportuna reforma que en ellas introduzcamos, se inicia en 1810 y que, quebrada por el régimen liberal, aún está inconclusa.

En procura de esa comunidad nacional, en procura de esa sociedad que requiere el cambio fundamental en todo el sistema de vivir argentino, en las instituciones políticas y en la organización social y económica, nosotros hoy aportamos nuestro esfuerzo en este debate sobre este instrumento político, para arrimar de esta manera una solución más a la salida total que el país requiere.

Quería expresar estas ideas generales para concluir. Reservo para la discusión en particular dar la razón de las otras disidencias que nos han movido a apartarnos parcialmente del despacho de la mayoría. Pero termino con esta exhortación exenta de animosidad y hecha de fraterna cordialidad cívica, de voluntad y de deseos de establecer una especie de ley de amis-

tad cívica entre los argentinos que nos permita, de una buena vez, dar con este instrumento el gran ejemplo de una conciliación definitiva de los argentinos y del avance hacia el futuro, con normas que no despierten temor a nadie, y que aseguren a todos la tranquilidad de su plena participación en los futuros procesos cívicos que se van a realizar en el país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Señor presidente: trataré de ser lo más concreto posible.

Deseo referirme en primer lugar al dictamen que juntamente con los señores diputados Ferreira y Achiary, de la Comisión de Justicia, firmamos en minoría propugnando un estatuto de los partidos políticos. Nuestro dictamen responde a una concepción orgánica de la democracia y, simultáneamente, se refiere a la actualidad política presente.

Elacer un estatuto político significa, por una parte, advertir la potestad del Estado y la propia responsabilidad de las organizaciones políticas para desenvolverse en democracia, pero también, y fundamentalmente, significa interpretar y analizar un momento circunstancial del país para el que se dicta.

Nuestra república pasa por un momento difícil, que yo llamaría de transición, y depende acaso de la feliz oportunidad en el aspecto político, que nos brinda este debate y la votación de este estatuto, para que demos la mejor salida de futuro a esta encrucijada circunstancial de la Argentina.

Como aquellas dificultades evidentemente se fundan en gran medida en la discutida representatividad que se atribuye a los poderes del Estado y, dentro de esta representatividad, a la autenticidad que las fuerzas políticas argentinas detentan, el régimen de los partidos constituye una pieza clave, juntamente con el régimen electoral, para reglar esta etapa de transición del proceso electoral.

Toda la doctrina moderna está conteste en que el sistema de partidos es el resorte fundamental del régimen político moderno. Prescindiré de hacer historia e, incluso, de recordar la doctrina comparada, y haré una simple alusión, al término de mi exposición, al proceso reciente que me ha tocado vivir.

Partiendo, entonces, de la premisa de que la democracia constituye el único principio de legitimidad aceptable en el siglo XX, de lo que se trata es de determinar cuál será el régimen político de acuerdo con el cual se organizarán las autoridades de la democracia.

Afirmo que nuestro dictamen, que voy a analizar en términos generales, es intérprete de la doctrina de la democracia en las democracias más avanzadas del mundo y es, además, intérprete del momento histórico de la Argentina en 1964.

El proyecto que sometemos a la Honorable Cámara constituye, primero, un instrumento simple, del que quedan expresamente excluidas las disposiciones detallistas y reglamentarias que dificultan la formación espontánea y natural de las fuerzas políticas; segundo, reduce al mínimo las atribuciones del poder del Estado, porque parte de la filosofía de que, si bien al Estado incumbe la custodia de la democracia, es más propiamente a las fuerzas sociales organizadas a las que corresponde la responsabilidad de esa custodia.

Además, como punto tercero, elimina cualquier tipo de discriminación ideológica que pueda servir como instrumento de proscripción eventual en manos de un gobierno enfrentado con perspectivas electorales desfavorables, y se limita a recabar de los partidos el acatamiento a los principios constitucionales.

Establece, además, un sistema simple pero expeditivo para la presentación y reconocimiento de los partidos y dispone que la jurisdicción competente en lo contencioso-electoral es la justicia nacional ordinaria, es decir, reniega de la justicia ad hoc creada expresamente como justicia electoral.

Deja, además, la más amplia libertad en materia de elección de candidatos. Esto, por motivos de orden constitucional, desde que la creación de nuevos requisitos, como puede ser la afiliación partidaria para ser candidato, excede el ámbito constitucional. La réplica vendría naturalmente, argumentando: si es un principio establecido en la Constitución, ¿por qué entonces establecerlo expresamente en la ley? Casualmente, porque el proyecto del Poder Ejecutivo trae esto que yo considero una aberración jurídica fundamental, que reconozco que el dictamen de la mayoría ha suprimido como prohibición expresa; pero esa sola circunstancia me crea la necesidad jurídica superabundante de establecerla como figura expresamente admitida en el contexto legal.

Pretendemos históricamente, y al margen de todo partidismo, ofrecer un dictamen elaborado, que constituya un estatuto neutral, cuya aplicación también colocamos en manos de instituciones neutrales.

Evidentemente, la filosofía en que se funda nuestro proyecto es no intervencionista. No hay ninguna razón para creer, desde nuestro punto de vista, que un instrumento intervencionista, detallista, reglamentarista, sea utilizado por el gobierno —en este caso particular por el gobierno actual— en defensa de los intereses generales, prescindiendo de su propia conveniencia. Prescindo, incluso, de que sea aplicado por este gobierno. Me coloco en la tesis legislativa, de lo que debe hacer el legislador; y lo que en este caso tenemos que hacer es dar la mayor garantía de neutralidad a quienes van a ser la consecuencia de la aplicación del estatuto. Es

decir, parto de la base de que el bien jurídico a preservar no es otro que el derecho político de los ciudadanos de expresarse de la manera que crean más conveniente, de elegir los candidatos que, realmente, representen sus ideas e intereses y de participar en los actos electorales, sin discriminaciones o exclusiones practicadas en interés de las fuerzas circunstancialmente gobernantes.

Estas son las razones de orden general que fundamentan el proyecto a consideración de la Cámara, suscrito en minoría.

Reitero que este estatuto vale en la Argentina de 1964. De ahí que el que propugnamos se oponga en este sentido, de manera polémica, a toda legislación vigente sobre la materia sancionada durante el anterior gobierno defacto y al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, a consideración del Honorable Congreso.

Consideramos que toda esa legislación, y en especial, el proyecto del Poder Ejecutivo, apunta a la consecución de tres objetivos fundamentales: primero, la consolidación de los actuales partidos políticos y, dentro de ellos, de sus autoridades presentes; segundo, la exclusión eventual del electorado peronista; y tercero, la proscripción de cualquier entendimiento de fuerzas afines susceptibles de dar base a una mayoría orgánica que pueda promover desde el poder las transformaciones que el país necesita.

Por lo expuesto, afirmamos que el dictamen de la mayoría, inspirado en el proyecto del Poder Ejecutivo, es un instrumento al servicio de la democracia limitada, y nosotros queremos que el actual Congreso sancione una legislación que promueva en el país la democracia de plena participación, sin exclusiones ni proscripciones.

El proyecto del Poder Ejecutivo intenta cristalizar la situación actual del país, que, a nuestra manera de ver, es inestable, porque deforma la verdadera imagen de la sociedad argentina y porque se funda en la exclusión de un sector sin cuya integración no puede haber paz ni tranquilidad en la República. Nosotros estamos persuadidos de que solamente una política diametralmente opuesta a la que surge del estatuto enviado por el Poder Ejecutivo podrá significar paz, conciliación, tranquilidad y convivencia de todas las fuerzas sociales argentinas. En este sentido, entendemos que la pretensión de someter a los partidos a un control ideológico importa: dar base legal a la proscripción del peronismo en los próximos comicios o en los sucesivos; además, significa la exclusión de candidaturas independientes, lo que configura un monopolio inconstitucional a favor de los actuales partidos y de las estructuras que los controlan; por otra parte, la profusa reglamentación en materia de nombres, organización interna, libros, etcétera, tiende a dejar en manos de una justicia, que puede estar políticamente inspirada, un abanico de pretextos para excluir a último momento a quien pueda presentarse como el opositor triunfante.

Sr. García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Gómez Machado. — Sí, señor diputado.

Sr. García. — Las tres finalidades que presuntivamente ha adjudicado al proyecto son cuestionables. Son simples conjeturas que, con todo derecho, plantea el señor diputado.

Sr. Gómez Machado. — Ya las voy a explicar, señor diputado. Yo estoy dando las bases de mi dictamen. Por lo demás, si los señores diputados están realmente en una tesis no proscriptiva, yo resigno mi firma de este dictamen y lo pongo a disposición del bloque de la mayoría; reniego de él para que así se haga un despacho de la Cámara, a fin de que se despeje cualquier sospecha. Lo que no entiendo es la dualidad de la mayoría, que declama democracia y legisla proscipciones.

Sr. García. — Ya que el señor diputado me ha concedido la interrupción, quería decirle que por lo menos el segundo punto aludido por el señor diputado, que envuelve una imputación de intenciones al despacho de la mayoría, no es exacto.

Sr. Gómez Machado. — Lo he reconocido, señor diputado.

Sr. García. — El principio de evitar las candidaturas independientes no es la base del despacho, sino que va a ser la tesis que sostendrá nuestro sector en disidencia.

Sr. Gómez Machado. — He dicho que tengo que reconocer que el despacho de la mayoría ha modificado ese aspecto al suprimir la prohibición. Pero esa sola circunstancia me obligaba a establecer expresamente en mi dictamen tal posibilidad, aunque apareciera como una redundancia. He reconocido el gran esfuerzo que se ha hecho por la mayoría de la comisión para modificar el proyecto del Poder Ejecutivo; pero advierto que se suprime la prohibición y no se establece la posibilidad expresa en un artículo. Si el proyecto del Poder Ejecutivo establece la prohibición, en tono polémico de interpretación como ese partido responde al Poder Ejecutivo, podría pensarse que hay otro requisito para ser candidato. La convicción de que esa mayoría no comparte el criterio del Poder Ejecutivo sería que estableciera en el dictamen, como lo hago yo, la posibilidad concreta, aunque esto parezca sobreaundante.

El Congreso, al margen del desenvolvimiento histórico de los últimos años, actúa en circunstancias que los sociólogos llaman de gran movilidad social. Hace un rato escuchaba con gran atención al distinguido colega de Santa Fe diputado Muniagurria, y advertía a través de sus expresiones el afán de contraponer los sectores de presión o los factores de poder a los partidos políticos, y además, la intención de institucionalizar estos grupos de interés, grupos de presión o factores de poder.

Yo creo que no es ése el modo de interpretar la realidad argentina presente, que, repito, es

de gran transición. Entiendo que los partidos políticos representan una manera institucionalizada de hacer opinión pública, pero no me asusta que no sean las únicas maneras de hacer opinión pública. Lo importante es que nosotros, a través de este estatuto, liquidando el reglamentarismo y la rigidez normativa, demos a este instrumento la flexibilidad suficiente para que sea capaz de interpretar a esos distintos sectores de presión, a esos distintos sectores de poder y a esos distintos sectores de interés, para que a través de los partidos políticos se canalicen. Pero lo que más me preocupa —y eso surge del contexto estructural del despacho de la mayoría— es que no tengamos la audacia y el valor de reconocer que estamos viviendo una etapa transitoria y que apenas si somos en esta Cámara una representatividad reducida o precaria.

Hace unos instantes escuchaba al señor diputado Vedia hacer un breve análisis del gobierno de Frondizi; por eso quería detenerme exclusivamente en este aspecto. Hizo alusión a un ministro inteligente que quiso hacerle creer a su presidente que podía ganar las elecciones. Yo viví algo de ese proceso. No aspiro a que los señores diputados me crean; pero afirmo que caímos, entre otras cosas, por dar comicios libres permitiendo la concurrencia del peronismo a las elecciones.

Pero, al margen de que yo tenga razón o que mi verdad histórica sea o no creída, al margen de que yo esté equivocado, si todos nosotros tenemos el espíritu de liquidar las proscipciones, ¿para qué creamos la instancia interpretativa? ¿Para qué mencionamos en el Estatuto de los Partidos Políticos la democracia o el totalitarismo o la concentración de poder, e instituímos la justicia que ha de hacer esa interpretación? Si en realidad tenemos la capacidad revolucionaria de calar hondo, tengamos la audacia de dictar la ley que evite las interpretaciones, que evite que dejemos en manos de un juez —el más probo de todos— la interpretación de la ley que dictamos. Evitemos mediatizar la jerarquía legislativa de este Congreso, dictando una ley, y no creando una instancia reflexiva de interpretación ulterior, que en última circunstancia podría significar la proscipción del enemigo triunfante. Evidentemente, si no lo hacemos así, es porque ocultamos algo.

Esto es lo que yo quería de este Congreso. Esa es la audacia que nos falta para interpretar que este año de 1964 no es el último año de la historia, ni el año en que se van a estratificar las instituciones; es apenas un año de paso, para dar cauces abiertos, si somos capaces, a la democracia representativa, sin limitaciones aberrantes, sin proscipciones.

Por eso, señor presidente, yo termino también mi exposición en tono de exhortación, no de polémica. Y digo que mi dictamen no me pertenece. Afirmo que es más sencillo; que podrá traer menos complicaciones en lo futuro; que

no tiene cláusulas que pueden interpretarse por sí o por no; que acaso puede ser el dictamen de un futuro promisorio. Personalmente no tendría inconvenientes en colocar ese dictamen a disposición de la Cámara y de todos los señores diputados, quitando de él mi firma, para que aparezca sin paternidad legislativa.

Ponemos así este dictamen a disposición de la Honorable Cámara, para que, liquidando de verdad las proscripciones hagamos audazmente como legisladores argentinos, lo que ese sector no representado del pueblo que anda por la calle espera de nosotros. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Señor presidente: yo he articulado una disidencia parcial —bastante extensa, por cierto— al despacho de la mayoría que suscribo, disidencia en la que interpreto, estoy seguro, el pensamiento de los conservadores de Buenos Aires, a quienes represento en esta Honorable Cámara.

Desde ya debo aclarar, como primera medida, que no he participado ni en la redacción ni el debate en comisión del proyecto que se trae a la consideración de la Cámara por la mayoría de la comisión, y que no he tenido oportunidad en la misma de sostener mis puntos de vista con respecto a esta disidencia concreta que presento.

El dictamen, en efecto, ha sido elaborado a través de largos meses de trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y cuando llegó a la Comisión de Justicia, que integro, era ya prácticamente un hecho consumado. Tanto es así, que la Comisión de Justicia celebró apenas una sola reunión, en la que no hizo otra cosa que comentar algunos artículos, y las tres comisiones que suscriben el dictamen celebraron también una sola reunión conjunta, en la que se consideraron exclusivamente los aspectos económicos de la ley.

Por supuesto que valoro cabalmente el esfuerzo de coincidencia que han tenido que hacer a lo largo de su trabajo los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, esfuerzo a través del cual, sin duda, vienen a quedar un tanto desdibujadas las posiciones de cada uno y las posiciones de todos. Valoro este esfuerzo y justifico también la impaciencia de algunos señores diputados, que, al cabo del tiempo, querían que de una vez por todas este asunto se tratase en el recinto de la Cámara; pero no puedo sino lamentar que las cosas hayan venido así y que yo tenga que traer al debate en el seno de la Cámara, distrayendo la atención de este cuerpo, una discrepancia que no es breve y que, si hace a la técnica y a la forma del cuerpo legal que se discute, hace también en algunos aspectos a materia de fondo.

Al ponerse a la tarea de legislar sobre partidos políticos, es conveniente tomar en consi-

deración, tal como es, la vida política toda del país, que no se reduce a los partidos y a las elecciones, sino que, por el contrario, ha ido expresándose cada vez más, y no siempre para bien, al margen de los partidos y de los comicios.

La realidad más evidente de nuestro tiempo es el paulatino decaimiento del prestigio de los partidos y la creciente gravitación, en su reemplazo, de los llamados factores de poder, o grupos de presión, o poderes de hecho, a los que han venido refiriéndose con reiteración los oradores que me han precedido. Fenómeno universal, sin duda, el de los factores de poder, pero especialmente notable y lamentable entre nosotros, que ha ido coincidiendo aquí y no ciertamente porque sí, con un proceso de descomposición de la unidad nacional.

Los hechos son evidentes. Desde hace años los partidos han ido contando cada vez menos con las mejores capacidades del país. Los estudiosos del derecho, los más altos valores de la literatura, los hombres que en el mundo dan prestigio a la ciencia y al arte de los argentinos, los empresarios que impulsan el desarrollo económico y aun las masas, que han adquirido conciencia de su papel protagónico, se muestran reacios a la acción política a través de los partidos. Cada cual se ha encerrado en su compartimiento estanco, se ha constreñido a los intereses de su sector, y pareciera que ni interés tiene en saber cuáles son las necesidades, las preocupaciones, las esperanzas y las tendencias de los compatriotas que militan en otros sectores.

A este país nuestro lo hicieron, en un enorme esfuerzo armónico de conjunto, todos sus hijos. En la política estuvieron, en las horas de la organización y del impulso portentoso, todos los valores más altos de la sociedad argentina. En los partidos y en los Congresos estaban en aquella época estadistas que, como alguien ha dicho, se habrían destacado en cualquier nación europea; estaban los profesores de la universidad y los militares que hicieron la guerra exterior y la conquista del desierto; estaban los pioneros que alambraron los campos y los maestros del derecho; los frailes iluminados de virtud y los estudiosos introductores de ideas nuevas. Ningún valor estimable dejó de actuar, en una época que abarcó más de sesenta años, en las lides políticas y a través de ellas; ningún valor caracterizado del país se perdió para el servicio de las instituciones nacionales.

Pero eso es el pasado. Hace tiempo que va estrechándose el campo de acción de los partidos y que va restringiéndose el aporte a ellos de valores, jóvenes o maduros, que, sin embargo, el país tiene en otras actividades. Y como el proceso es evidente que coincide con la atomización social que venimos soportando, paralela de nuestro desconcierto nacional, bueno es que al-

gún día nos pongamos a buscarle remedio. Yo anoto por ahora que ese proceso coincide con el de desprestigio de los partidos políticos y con el reemplazo de los partidos, en su función específica de hacer la política nacional, por otros grupos sociales, por grupos que no obedecen, como los partidos, a las concepciones integrales de la vida nacional, sino a intereses parcializados, necesariamente egoístas por estar encerrados en sí mismo, por muy respetables que sean.

El desprestigio notorio de los partidos, que han ido así cediendo sus puestos, es paralelo —doloroso es decirlo— al desprestigio de las instituciones que no rigen, rodeados notoriamente de un escepticismo evidente, a veces nihilista, ocasionando, sin duda, los mayores trastornos.

Claro, señor presidente, que sería pretencioso hacer aquí y en estas circunstancias un examen sociológico de toda nuestra realidad, para determinar el porqué íntegro de estas cosas. Pero no podemos dejar de anotar que las frustraciones repetidas, el anquilosamiento, la inautenticidad y las deficiencias de organización interna son a la vez causa y efecto del desprestigio de nuestros partidos. Y tal indiferencia los rodea en un país que, paradójicamente, está politizado en todos sus sectores.

El debilitamiento y la sustitución de los partidos es una de las graves enfermedades de nuestra sociedad, uno de los fenómenos evidentes de nuestra crisis o, si se prefiere, de nuestra decadencia, como diría Ortega y Gasset analizando los síntomas de atomización, de encaillamiento de intereses, de particularismo y de creación de compartimientos estancos que caracterizan nuestra realidad social de esta hora. El mismo Ortega señalaba que lo único que nutre el proceso vital de las naciones es un «proyecto sugestivo de vida en común», y que ellas se desintegran cuando ese tipo de ideales falta. Eso, señor presidente, es lo que nos está pasando a nosotros. La Nación necesita fuerzas aglutinantes capaces de darle un sentido de unidad, que actúen con vigor, que hagan notar su presencia, que graviten en el seno de la sociedad y en las instituciones. La Nación necesita volver de una vez por todas a ser nación cabal, que ya va dejando de serlo para ser una aglomeración de grupos cada vez más extraños entre sí y más indiferentes e incommunicados unos de los otros. Necesita formulaciones vigorosas, como decía Ortega, de proyectos de vida en común, y eso sólo y exclusivamente puede lograrse, sobre todo dentro del terreno político y de nuestro sistema tradicional, a través de partidos fuertes y coherentes.

Digamos también de una vez que sólo a través del fortalecimiento de los partidos y de la actualización de su vigencia podrán fortalecerse las instituciones democráticas. No hay democracia, tal como la concebimos —y éste es un concepto que también se ha repetido en

este debate, entiendo que por todo los oradores— sin partidos políticos, sobre todo sin partidos que hagan en sí la síntesis de los grupos sociales y de los intereses contrapuestos. De ahí la necesidad de legislar sobre partidos con vistas a otorgarles autenticidad, corrección de procedimientos internos, poder para actuar e influir, a la vez que asegurar a los ciudadanos la posibilidad de ingresar a ellos y de actuar en su seno con garantías. No se trata sólo de los derechos de los partidos como formaciones espontáneas del cuerpo social; se trata de que los partidos tienen una eminente función nacional que cumplir, que interesa a la colectividad que la cumplan y que los órganos de la colectividad deban fiscalizar ese cumplimiento.

En esa forma, haciéndolos, por así decirlo, atrayentes, contribuiremos a prestigiar los partidos y a rehabilitar su vigencia en la vida nacional.

Pero no todo es legislar sobre partidos, porque eso sería tanto como parcializar el problema, constreñirlo a un solo aspecto de la realidad, insistir, en definitiva, en un método del que viene usándose, inclusive con abuso, que consiste en no ir a la raíz de las cosas, en una curiosa política de hacer como que la realidad no existe, a pesar de las reclamaciones acuciantes de la realidad. En una política que consiste, en definitiva, y diciéndolo de una vez por todas, en pocas palabras, en tomar el rábano por las hojas.

La ley orgánica de los partidos políticos no es ni puede ser, así saliese de este Congreso perfecta, una panacea para nuestros males políticos, porque no todo lo que debe resolverse es la organización y la actuación de partidos, ni la orientación de las agrupaciones políticas en su vida interna. Interesa más que los partidos sean verdaderos partidos políticos, es decir órganos verdaderos de la democracia en la que aspiramos a vivir, y para eso hay que considerarlos dentro del conjunto de la vida nacional y muy en particular frente a los llamados grupos de presión o factores de poder, que en tan gran medida han sustituido a los partidos, que se han convertido en verdaderos poderes de hecho dentro de las instituciones de la República.

Yo no quiero decir, ni muchísimo menos, que esos grupos o que esos factores de poder no respondan a una necesidad social auténtica. No quiero decir tampoco que no cumplan una función eminente o importante; no quiero decir que no tengan derecho a gravitar en política; lo que quiero decir es que los partidos deben ser fortalecidos para que en su misión específica no sean totalmente sustituidos por los grupos de presión o por los grupos de intereses.

Poco se logrará dictando normas legales sobre organización y funcionamiento de los partidos, si otros institutos legales otorgan una fuerza incontrastable a grupos parcializados que también hacen política, que tienen vocación para desplazar a partidos y que responden en su

estructura y sentido a motivos y objetos absolutamente dispares de los motivos y objetos de los partidos, sobre todo si esos institutos legales no están concebidos de manera coherente con la organización general del país.

No hace falta que diga, señor presidente, que me estoy refiriendo, por supuesto, a la organización sindical. Y yo digo que este proyecto en discusión, con el que se pretende fortalecer a los partidos políticos, concebido de acuerdo —dígase lo que se quiera— con una concepción liberal de la función de los partidos, es incongruente con una ley de asociaciones profesionales que otorga fuerza política excepcional a determinados grupos de presión, concebidos de acuerdo con una mentalidad corporativa o fascista absolutamente incompatible con la mentalidad que preside la redacción del estatuto de los partidos políticos que estamos considerando. Me permitiré una digresión sobre este tema.

La ley de asociaciones profesionales organiza las cosas de manera tal que en cada gremio o en cada ramo del trabajo nacional se permite actuar con autoridad, funciones y jerarquía de verdadero sindicato a uno solo, al que tiene personería gremial. Los otros que libremente puedan constituirse, según lo declara explícitamente la ley, quedan relegados al papel de meras asociaciones culturales, cooperativas o recreativas. La adhesión a ese sindicato único se hace así prácticamente obligatoria para todos aquellos trabajadores que por algún medio quieren defender sus intereses. Las contribuciones, como consecuencia de una adhesión que en los hechos se hace obligatoria, necesariamente vienen a ser también obligatorias.

A esos sindicatos así organizados no les está vedado hacer política, por supuesto. Entiéndase bien: no soy enemigo de que los sindicatos actúen en política. Es más; creo que su función, en última instancia, es una función política. Creo que es legítimo que los sindicatos actúen en política, como lo han hecho en el pasado en este país sin que nadie levantara objeciones a esa actuación, y como ocurre en otros países democráticos del mundo. Lo que digo al mismo tiempo es que, mientras los sindicatos estén organizados en esta forma exclusiva, rodeados de privilegios excepcionales que el Estado les otorga, organizados prácticamente como órganos del Estado, entonces debe estarles tan vedado hacer política partidaria como al Consejo Nacional de Educación o a la Dirección de Impuestos Internos.

No puedo dejar de señalar que mientras esté vigente la ley de asociaciones profesionales 14.455, la ley de partidos políticos, cualquiera sea la que se dicte, cumplirá muy relativamente sus fines, porque al lado de los partidos de la ley que se proyecta existirán otros, que por sí no podrán nominar candidatos, pero que nominarán candidatos por medio de partidos títeres sometidos a ellos, a su poder económico e, in-

clusive, a su poder disciplinario. Como ha ocurrido —por supuesto que no estoy inventando lo que podría suceder— en la experiencia argentina más reciente, y como sin duda están preparadas las cosas para que vuelva a suceder.

No puedo pasar por alto en este momento de mi exposición el decir que eludir este tema, referirnos exclusivamente a la organización de los partidos políticos a través de la ley, por perfecta que sea, sin considerar al mismo tiempo la organización sindical, vigente la ley actual, es hacer una vez más la política del avestruz.

Creo que en esta materia todos tenemos responsabilidad, pero creo que principal responsabilidad, aunque no exclusiva, tiene el partido que en este momento ejerce el gobierno ejecutivo de la República, y que tiene la mayoría en las dos Cámaras del Congreso, si bien mayoría relativa en esta Cámara.

Tengo que recordar a este propósito la actitud que ese mismo partido asumió cuando no era gobierno. De cuando se discutió en esta Cámara la ley de asociaciones profesionales vigente, en el mes de junio de 1958, todos recordamos todavía la brillante exposición del señor diputado Casella Piñero y la exposición del actual vicepresidente de la República, doctor Perette, a quien pertenece este párrafo: «Esta legislación no traerá paz, sosiego ni tranquilidad en los sectores laborales argentinos. La modificación proyectada es una decisión para la regresión y traerá graves perjuicios a la sociedad y al país. Es una reforma reaccionaria, regresiva y totalitaria.» Y el mismo orador agregaba, señalando un compromiso para la acción de su partido en el porvenir, un compromiso que está vigente en esta hora: «Queremos señalar, señor presidente, que estos principios no pueden ser puestos en tela de juicio y que nuestra postura será seguida hoy desde la oposición y mañana desde el gobierno, cuando así lo determine la voluntad ciudadana, con la seguridad de servir una causa justa y de dignidad humana.»

No muchas semanas después —consta en el Diario de Sesiones del 3 de septiembre de 1958— los diputados del radicalismo del pueblo Carlos H. Perette, Raúl J. Zarriello, Ricardo Fuertes, Aldo Tessio y otros, presentaban un proyecto de ley concebido en poquísimos artículos, pero de una claridad meridiana, ya que el artículo 19 decía: «Derógase la ley de asociaciones profesionales 14.455 por ser inconstitucional, de carácter fascista y totalitaria, y a la vez violatoria del derecho de agremiación y de la libertad de asociación.»

No puedo dejar de recordar estas cosas cuando una y otra vez se nos hace presente, en todos los tonos, la perfecta coherencia de ideas, la perfecta lealtad mantenida desde el gobierno a las ideas y los principios que se enunciaron en la oposición. Y digo que ésta es, una vez más, una de las causas del desprestigio de los partidos políticos, que no son capaces, en la hora de la responsabilidad, de cumplir con las promesas

que hicieron cuando era fácil lanzar promesas al aire.

Sr. García. — Nuestro compromiso es la plataforma partidaria y no manifestaciones individuales.

Sr. González Bergez. — El señor diputado sabe que la acción del legislador debe ser coherente con la plataforma.

Sr. García. — Ese es otro problema.

Sr. González Bergez. — Es el primer principio de la moral política. Y el señor diputado también sabe que la opinión pública juzga a los partidos por la actuación de sus dirigentes más que por las palabras escritas en sus plataformas, que, por otra parte, la mayoría de las personas no conoce.

Sr. García. — Nuestra plataforma está siendo cumplida con una fidelidad absoluta que nos honra.

Sr. González Bergez. — Yo no me honraría tanto con actitudes de este tipo.

Sr. García. — Es cuestión de apreciación.

Sr. González Bergez. — En los hechos la ley de asociaciones profesionales es también parte del estatuto de los partidos políticos. No cabe ninguna duda, porque las disposiciones que vamos a adoptar no constituirán una ley isla en el país, sino que son una pieza de un todo y se vinculan con toda su legislación. Y en ese todo está la ley de asociaciones profesionales, calificada con acierto por el radicalismo del pueblo de fascista y totalitaria cuando, por supuesto, no tenía fuerza para derogarla.

Por todas estas razones contemplo con algún escepticismo las virtudes definitivas de la ley que discutimos, y no me siento nada inclinado a dejarme seducir por las grandes palabras con que se la presenta. Yo no he participado ni estoy dispuesto a participar del coro de los que ponderan su trascendencia, que por fuerza será muy relativa en nuestra vida institucional mientras nos quedemos sólo en ella. Porque me parecería, si me sumara a ese coro, que me estoy prestando a una farsa donde todos nos empeñaríamos en hacer una política de insinceridad. No puedo negar, sin embargo, a fuer de sincero también, la convicción auténtica con que otros han hecho de esta ley una cuestión fundamental. ¿Qué ven en ella, señor presidente? ¿Qué hay, además de un discreto ordenamiento de los partidos políticos, para que se haya reclamado esta ley con tanta vehemencia? Y bien, hay dos cosas diferentes. Para algunos, el propósito de eliminar prohibiciones, obstáculos, requisitos y proscripciones que impone la ley que ahora rige. Para otros, por el contrario, el propósito de establecer garantías para las instituciones democráticas, y hasta en algún caso —¿para qué vamos a engañarnos?—, el propósito de sustituir, con algunos eufemismos, las trabas vigentes por otras trabas.

A los primeros, que quieren eliminar restricciones y proscripciones, yo les digo que los com-

prendo, porque no les falta razón desde su punto de vista. Les digo que los comprendo y que institucionalmente participo también de sus puntos de vista; pero que no son del todo justos al indignarse contra los que crearon las restricciones, porque demuestran empeñarse en no entender la realidad total. Esta realidad total es que en 1955 hubo una revolución que costó mucho y que cerró definitivamente una etapa de la vida nacional; una etapa en la que ocurrieron muchas cosas que nos humillaron y lesionaron, que nadie ha olvidado, aunque por cálculo se simule amnesia, y que de ninguna manera puede volver. Históricamente, aquello terminó. Históricamente, sería necesario para que volviera un nuevo hecho de armas, como el de 1955 pero de signo distinto. La realidad de todos los días, frecuentemente más fuerte que las doctrinas y aun que las leyes escritas, nos está advirtiendo que esto es así; y no caprichosamente, ni porque nadie se empeñe en mantener a lo largo del tiempo un derecho revolucionario que tuvo nacimiento nueve años atrás. Es por una exigencia ineludible de la convivencia pacífica argentina. Hay que entenderlo y reconocerlo así, no ya en privado, como solemos oír que se hace, sino públicamente; para establecer las bases nuevas y sólidas del entendimiento entre todos. Para que la Nación pueda retomar el camino interrumpido de su progreso pacífico y sin sobresaltos. Porque nadie pretende imponer a nadie condiciones humillantes, pero todos necesitan saber a qué atenerse.

Ya sé que podrá decirse que todos hemos cometido errores. Me adelanto a admitir que sí. No saco cuentas sobre la entidad de los errores y de los aciertos de cada cual. No fue precisamente por sus aciertos, sino por sus errores, que antes de 1955 terminaron violentamente un gobierno radical y después uno conservador. Pero sé decir de nosotros que hemos sido claros y objetivos al reconocer, paladinamente, una y otra vez, cuánto nos equivocamos y cómo en un momento dado los gobernantes salidos de nuestras filas llegaron a quedar desvinculados de la realidad nacional. Y sé decir que hemos sabido después, en un camino que ha sido muy áspero, mostrar una conducta sin reproche, capaz de revalidar los títulos del conservadurismo argentino.

A los segundos, a los que piensan en una u otra forma en proscribir sectores, yo les digo: las proscripciones no sirven para nada bueno; corrompen, distorsionan, fomentan el disimulo y el engaño, encienden resentimientos; crean el mercado negro de los votos mostrencos, los pactos inconfesables y los frentes insinceros, especie de sociedades de capital e industria, en las que los proscriptos ponen el capital y los aventureros la industria. El problema de los que no se avienen a la convivencia pacífica en la libertad, existe. Existe, por supuesto, y no es baladí; pero debe enfrentarse con seriedad, con grandeza y

con coraje; no tomando por el atajo de los remedios de superficie y los dispositivos formales, que desde hace ya largos años vienen perturbando la vida argentina. Proscripciones no, de ninguna manera, para ningún sector político. Recaudos estrictos en la organización partidaria, claridad en el origen de los fondos y exigencias de estructura democrática interna, eso sí. Pero también, indispensablemente, desarme del aparato sindical totalitario, cuya vigencia hará inútiles todas las previsiones de cualquier estatuto de partidos políticos.

Señor presidente: advierto que me he extendido más de lo que hubiese deseado, sin entrar a la consideración de las discrepancias parciales de forma y de fondo que contiene mi dictamen. Voy a procurar hacerlo con la brevedad que me sea posible y constriñéndome, exclusivamente, a las disidencias que considero esenciales. Para ello me permito rogar, por intermedio de la Presidencia, a la Honorable Cámara, que ha sido tan benévola conmigo, acepte que continúe durante diez minutos más con mi exposición.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Si hay asentimiento, se concederá al señor diputado el plazo que ha solicitado para concluir su exposición.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Continúa en el uso de la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez.— En primer lugar, voy a referirme a las discrepancias fundamentales que contiene el dictamen que he suscrito.

El artículo 3º, que se refiere a las condiciones sustanciales que deben reunir los partidos políticos, en su inciso b) habla de una «doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez que propugne expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano, y el de los principios y los fines de la Constitución Nacional». No se entiende muy bien y no sé qué es lo que quiere decir esto de «en la determinación de la política nacional». Me interesa más señalar, sin embargo, que al final del inciso existen dos exigencias: una, que los partidos propugnen expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano; y otra, que propugnen el sostenimiento de los principios y los fines de la Constitución Nacional. Se advierte con claridad que el sistema democrático, representativo y republicano no ha de ser uno de los principios de la Constitución Nacional, porque se lo menciona por separado, de modo tal que se contribuye, en esta forma, a crear alguna oscuridad sobre cuáles son los principios de la Constitución Nacional. Yo creo que uno de los principios esenciales de la Constitución Nacional es el régimen republicano representativo, y creo también que hay otros principios, que no son éstos, y que es muy difícil

establecer dónde comienzan y dónde terminan. ¿Dónde terminan los principios y comienza otro tipo de disposiciones? Por supuesto que el régimen federal es —y de esto nadie tiene dudas— uno de los principios de la Constitución Nacional. Sin embargo, la comisión ha eliminado toda referencia expresa al sostenimiento del federalismo. No se exige a los partidos que sean federales, pero se les exige que sostengan los principios de la Constitución Nacional, entre los cuales está el federalismo, sin duda; como están también el régimen bicameral y el sostenimiento de la religión católica apostólica romana. Y así podríamos enumerar una larga serie de principios en los que, sin duda alguna, no coinciden todos los partidos, por discrepancias que son respetables y que siempre se han respetado en nuestro país.

Esto de introducir los principios de la Constitución Nacional o, mejor dicho, la promoción de dichos principios como una exigencia para que los partidos puedan existir, equivale a tanto como cerrar las puertas de la acción a muchos partidos cuya contribución puede ser útil para el desenvolvimiento institucional argentino, sin que con esto se gane nada.

Ayer se ha dicho aquí, a raíz de una cuestión expresamente planteada por el señor diputado Muñiz, que a los partidos se les permitirá proponer la sustitución de los principios de la Constitución Nacional si para ello se avienen al procedimiento de reforma que la misma Constitución establece. Yo digo que éste es o puede ser el criterio de la comisión, que puede ser la palabra del miembro informante, pero que no es el texto de la ley. Cuando los jueces han de aplicar la ley, primero han de someterse a su texto, y cuando su texto sea oscuro —solamente en este caso— podrán atenerse a la voluntad del legislador, expresada por el miembro informante. Pero en este caso el texto es absolutamente claro. Por eso propongo que se sustituya ese inciso b) por uno que no daría lugar a las mismas dificultades y que creo que contempla el espíritu de todos. Diría así: «La declaración y práctica de una doctrina política que propugne expresamente el respeto de los derechos humanos —esto sí importa— y el régimen republicano democrático, con pluralidad de partidos actuando en libertad». La Constitución es reformable, y es mejor no hacer a ella referencia expresa.

Sr. Grau.— ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. González Bergez.— Sí, señor diputado.

Sr. Grau.— Creo que el señor diputado González Bergez está introduciendo en su exposición algunos elementos de confusión al hacer la crítica de la terminología o de la redacción del articulado del proyecto, que puede ser defectuosa.

Los otros días, en una intervención accidental, el señor diputado González Bergez se refirió al derecho de propiedad en la Constitución, a fin de determinar su carácter individual o colectivo. El señor diputado Muñiz, interrumpiendo al señor diputado Sandler, preguntó si la propiedad colectiva cabía dentro del derecho de propiedad establecido por nuestra Constitución. Me parece que entonces el señor diputado González Bergez sostuvo que el concepto de la Constitución era el de la propiedad individual y no el de la propiedad colectiva.

Quiero advertir la confusión en que incurre, porque ahora habla de los derechos humanos, y en la Declaración de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se menciona el derecho de propiedad individual y colectiva. Vale decir que de esta manera estaríamos modificando a través de una ley la interpretación de una norma constitucional.

Sr. González Bergez.—No puedo dejar de hacer notar al señor diputado que mi proyecto habla de derechos humanos en forma genérica y sin referirse la declaración de las Naciones Unidas, porque ello significaría incorporar todos y cada uno de los derechos declarados por el organismo internacional, lo que sería demasiado detallista.

Es probable que mi exposición, como dice el señor diputado, esté introduciendo factores de confusión en la interpretación del artículo, pero si lo que digo es cierto, corresponde modificar el texto de la disposición para no obligar a los jueces —según una jurisprudencia que aquí parece querer sentarse desde hace un tiempo— a interpretar la ley por las expresiones que se vierten en su discusión, prescindiendo de su texto explícito.

Correlativamente a esta modificación del inciso b) del artículo 3º quiero referirme a los artículos 21 y 22 del proyecto de la mayoría. El artículo 22, vinculado al artículo 21 que habla de la declaración de principios de los partidos, establece concretamente —no son palabras mías, sino de algún otro señor diputado vertidos en la comisión— un catálogo de los pecados cometidos por los partidos políticos argentinos en el pasado, catálogo ciertamente poco decoroso, y cada uno de los puntos de esa larga enumeración es no sólo susceptible de crítica —crítica que aquí ya se ha hecho hace un momento por el señor diputado Vedia al referirse con acierto al inciso a), y ayer por el señor diputado Musacchio—, sino que cada uno de esos puntos es también absolutamente oscuro en sí mismo, y no dará lugar sino a complicaciones y dificultades. Por otra parte, es una casuística totalmente inoperante, por que no hay partido político argentino, y seguramente tampoco lo habrá en el futuro, que en su declaración de principios o en su acción concreta propicie el

régimen de partido único, el fraude y la violencia, que son delitos del Código Penal; la discriminación racial, que es un delito incorporado hace muy poco al Código Penal, etcétera. Incluso uno de esos incisos, el h), que habla de la «implantación, por medio de leyes o decretos, de proscripciones o inhabilitaciones electorales de personas o partidos determinados», se presta a situaciones que me parece no han estado en la voluntad de quienes lo redactaron. Así, un partido que sostuviese que la edad mínima para sufragar debe elevarse de los 18 a los 20 ó 21 años, como ocurre en otros países, o bien que no es conveniente que voten los analfabetos o los que no tengan algunas nociones mínimas sobre el régimen de la Constitución Nacional, ¿no caería también en las proscripciones del artículo 22? Y no me conformo con que se me diga que no habrá juez en la República que a los partidos que auspicien esas reformas les quite su personería, puesto que allí está la letra del artículo 22. De modo que si no se quiere este efecto, la finalidad se logra muy sencillamente no diciéndolo en la ley.

Me parece preferible suprimir esta enumeración casuística e, inclusive, poco edificante para todos los partidos políticos. Vale decir que es mejor suprimirla, como lo proponen algunas de las iniciativas que se presentan como disidencias parciales al despacho de la mayoría, e incluir algún texto general, como este que propongo como punto 2º del artículo 3º: «Violan los requisitos de los incisos b) y c) los partidos que por su doctrina o en su actuación auspicien en forma directa o indirecta o lleven a la práctica, en su acción exterior o en su organización y vida interna, la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático por cualquier otro, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza o la concentración personal del poder». Es probable que este texto que propongo quede incompleto; es probable, inclusive, que haya en él algunas palabras de más; pero es preferible que vayamos a una disposición de tipo general como ésta, que se inspira, por cierto, en un texto semejante del proyecto del Poder Ejecutivo, sustituyendo ese artículo 22, humillante para algunos, ridículo para otros, y me parece que inoperante para todos.

Con respecto a los artículos 30 a 33, donde se habla de la afiliación, yo sugeriría algunas modificaciones tendientes —lo diré muy rápidamente, para ir abreviando mi exposición— a que exista un control eficaz sobre la autenticidad de las afiliaciones. Es preciso evitar las dobles afiliaciones, cosa que se hace absolutamente imposible si no hay un fichero general de afiliados de los partidos, llevado por la justicia electoral, del cual surja la posibilidad de cotejo con los registros de afiliados de los distintos partidos. Ocurre que la doble afiliación es uno de los graves vicios de la política de los

partidos argentinos. Hasta parece mentira que debamos decir aquí que hay organizaciones que se ocupan, por medio de dobles afiliaciones, de organizar elecciones internas en los distintos partidos. Para permitir este control se hace necesario, por supuesto, que el duplicado del fichero de los partidos sea llevado por la justicia electoral. En este aspecto coincido con el criterio con que ha hecho una disidencia parcial mi compañero de sector, el señor diputado Belgrano Rawson, suprimiendo el artículo 33 del proyecto de la mayoría. Sin control eficaz de la justicia en este tema no habrá partidos serios, organizados, partidos con auténtica democracia interna.

El artículo 38, en su inciso e), establece inhabilidades para ser miembro de los organismos directivos, o candidato a cargos electivos de los partidos políticos, determinando que no podrán serlo «los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas», etcétera. Sin perjuicio de hacer notar que las obras públicas se contratan y no se conceden...

Sr. Grau. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. González Bergez. — Sí, señor diputado.

Sr. Grau. — Entiendo que el señor diputado está en un error.

Las obras públicas se conceden o se contratan, porque a veces, a través de un concesionario, que se convierte en contratista, las obras públicas pasan a ser obras de una concesión. De tal manera que podría decirse obras que se conceden o que se contratan bajo cualquier forma. No es un error el que contiene el proyecto al no referirse a la contratación directa, porque, repito, las obras pueden contratarse a través de un concesionario.

De manera que me parece que está en un error el señor diputado.

Sr. González Bergez. — De cualquier manera, ésa es una cuestión de detalle, porque me iba a referir a lo sustancial del inciso, que es lo que interesa: la prohibición de desempeñar cargos directivos de los partidos o ser candidato a cargos electivos para aquellos que desempeñen cargos directivos o fueren apoderados de este tipo de empresas.

A este respecto quiero hacer notar que esto responde a un criterio que podía tener alguna vigencia muchos años atrás, cuando existían grandes empresas concesionarias de servicios públicos, cuando el país era otro. Esto podía tener alguna importancia a fines del siglo pasado o a principios del actual, cuando había grandes empresas concesionarias de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, de gas y de puertos. Todas esas empresas ya no existen, todos esos servicios están en manos del Estado. Ya no

existen tampoco grandes concesiones eléctricas; ahora las empresas concesionarias de servicios públicos normalmente son mucho más modestas, tienen muchas menos posibilidades de influencia o de injerencia en el poder público o en las cuestiones políticas.

En la inmensa mayoría de los casos, se trata de pequeñas concesiones de transportes o de servicios de electricidad locales.

Con este inciso, el conductor de un colectivo, que generalmente es gerente o tesorero de su línea, no podrá ser ni vocal del comité de su pueblo. El abogado de una cooperativa de servicios eléctricos de cualquier pueblo de campaña, modesto abogado, que ni sueña con tener influencia a través del capital sobre el poder público, no podrá ser ni vocal del comité de su distrito, ni candidato a ningún cargo electivo.

Esto es un anacronismo, esto responde a una mentalidad que no está acorde con la realidad actual del país. Además, entraña una gran ingenuidad, porque hay otras grandes empresas, mucho más grandes que las de servicios públicos, que normalmente representan grandes concentraciones de capital, interesadas en gravitar —y que gravitan— en las funciones del poder público, como son las empresas extractoras de petróleo, fabricantes de automóviles, industrializadoras de carnes, cuyos directivos y apoderados no tendrán incompatibilidades de este tipo.

Además del anacronismo y de la ingenuidad que este inciso encierra, entraña también un quebrantamiento de las normas de la Constitución, porque para ser diputado nacional, o elector de presidente de la República o de senador por la Capital, no hay que reunir otros requisitos que los que establece la Constitución, sin que el Congreso pueda agregar a esos requisitos ningún otro. En cambio, si puede el Congreso, que dicta leyes orgánicas para el Ejército, para la policía, para la justicia, o leyes de asociaciones profesionales, disponer, como en la práctica aquí se dispone, que los militares en actividad, o los policías en actividad, no podrán actuar en política a través del desempeño de cargos o de la nominación para candidaturas partidarias. Nosotros proponemos que a estas inhabilidades se agregue, eso sí, la inhabilidad de los miembros de las comisiones directivas de los sindicatos con personería gremial, porque ellos gozan de un privilegio que el Estado les otorga, y porque la realidad nos enseña cómo a través de estos sindicatos se hace todo tipo de política con fondos recaudados —contribuciones casi obligatoriamente impuestas por la ley— para un destino absolutamente distinto, y que en definitiva van a gravitar en actos electorales y a servir la política de partido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia señala al señor diputado que se ha excedido en diez minutos de igual lapso que le corres-

pondría y, recordando la recomendación de ayer del señor diputado Ghioldi, lo exhorta a cerrar su pensamiento.

Sr. González Bergez. — Con esto termino, señor presidente.

Había entrado en un terreno en que las discrepancias, si bien se hacían cada vez más numerosas, también eran cada vez menos importantes. Creo que, a través de los términos con que he comenzado mi exposición, procurando fijar una posición política frente a este problema, he interpretado el pensamiento del partido que aquí represento.

Pido a la Cámara que me disculpe haber abusado de su tiempo, y con esto he terminado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — En la sesión de esta tarde y parte de ayer, lo que ha de ser la ley orgánica de los partidos políticos ha recibido embates que estimo tan inciertos como injustos. Por eso debo iniciar mi exposición con una referencia inexcusable a la valoración que nosotros hacemos de este proyecto en debate. Se lo ha querido presentar como una mera regla de juego, como una suerte de compromiso para salir del paso en la coyuntura político-electoral que vive la República, de modo tal que instrumentada por ella y pasada esa coyuntura, no sería ley con sentido de permanencia de la Nación y a su servicio. Hasta sería, incluso, de acuerdo a algunas apreciaciones, un compromiso pegado así, casi con alfileres, en el aire. Y estos embates que ha recibido lo que ha de ser, de una u otra forma la ley orgánica de los partidos políticos, reitero son tan injustos como inexactos. En nuestra comprensión del problema esta ley habrá de dar seriedad y organicidad a estas herramientas que hacen al cimiento institucional del país, como son los partidos políticos.

Me parece pertinente reiterar lo que ya se manifestó en la sesión de ayer. Ya lo dijo la nota jus-filosófica de Kelsen, quien ha penetrado con tanta hondura en el pensamiento y en los perfiles sociológicos del mundo moderno. Reitero el concepto, porque me parece que constituye una respuesta calificada a este demérito con que se ha querido tratar el despacho en alguna expresión que estimo, repito, injusta: «El Estado democrático es un estado de partidos —dice Kelsen—; sólo por ofuscación o dolo puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos.» Esta cita es de su obra *Esencia y valor de la democracia*, Barcelona, 1934, que fue traída al debate ya ayer en este recinto.

Es decir, entonces, que no se puede tomar así, ligeramente, un instrumento como el que estamos debatiendo para presentarlo como una suerte, repito, de compromiso pegado con alfileres para salir de la actual coyuntura política que vive la República, sino como algo mucho

más serio y trascendente: la problemática del partido político, hoy y aquí, se integra y se confunde, a través de esta cita de Kelsen y de todo el pensamiento del derecho político moderno, con la problemática del Estado. Si ello es así, nosotros entendemos —tenemos la absoluta convicción— que la Argentina, esta Argentina nuestra y de hoy, que avanza cada día más en la formación de su nuevo perfil nacional en lo político, en lo económico y en lo social, está asistiendo, a través de este debate y pese a algunas expresiones del tipo que he analizado, a una instancia seria y trascendente, tendiente a dar fijeza, a dar organicidad a estos elementos vivos e irremplazables de la democracia.

Por eso estamos seguros y ciertos de que hoy vivimos esa nueva instancia legislativa, que ha de permitir un paso favorable en la evolución feliz del desarrollo institucional de la República.

Dice Federico Gil, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Carolina del Norte, en un párrafo de su magnífica conferencia dada hace algunos años en la Universidad de Córdoba, algo importante, que no por haber sido dicho antes no debemos reiterarlo con la mayor insistencia. Expresó que las sociedades pluralistas contemporáneas —y desde luego la nuestra, la Argentina de hoy y aquí— tienen urgencia en organizar los partidos políticos con criterio jus-sociológico; es decir, que debe el Estado preocuparse por normativizar el funcionamiento y la acción de los partidos políticos en el marco de la sociedad total, global, y establecer con la mayor inteligencia y percepción posible sus funciones, porque estas formaciones sociológicas juegan un papel insustituible, repito, en la regulación del equilibrio de todas las fuerzas convergentes, multiformes, agudas, intensas, a veces contradictorias, a veces solidarias, que actúan en el seno de nuestra sociedad moderna y que van estructurando nuestra personalidad social y también como país y como nación, cuyo prestigio aparecería comprometido a través de una suerte de decadencia, insinuada en el discurso pronunciado por el señor diputado González Bergez.

Por eso la referencia histórica me ha parecido interesante. Yo, que adjudico a este debate la importancia sustancial que tiene en nuestra evolución institucional, quiero señalar que es dable advertir la distinta valoración con que han sido merituados los partidos políticos. Triepel ya nos habla de las cuatro etapas que ciertamente ha recorrido la evolución histórica de los partidos políticos: la primera, de lucha; la segunda, de ignorancia; la tercera, de legalización, y, finalmente, la última, a la que estamos asistiendo, protagonizando en este momento: su incorporación plena al mecanismo de la racionalidad jurídica e institucional por medio de leyes del tipo de la que estamos debatiendo.

Se ha señalado muy bien que los partidos, hasta finalizar la primera mitad del siglo pasado, eran considerados con evidente demérito, como un actuar negativo y desdichado en la vida pública. Se los equiparaba a la facción. Incluso la etimología de la palabra «partido», que procede de «parte», parecía contraponerla con el conjunto, con el todo que eran los intereses de la nación: la facción representada por el partido político, contra el todo que era la nación.

Como lo recuerda con todo acierto César Enrique Romero, nuestro constitucionalista riojano, y cordobés por adopción, en los pródromos de nuestro constitucionalismo se recogen estas notas adversas a la vigencia de los partidos políticos. Ya Washington, en los inicios de la conformación del constitucionalismo norteamericano, que ha sido nuestra fuente en muchos aspectos, como es notorio, miraba con evidente retracción a los partidos políticos. El propio Washington expresó en su conocido discurso de despedida, «Farewell address», que concebía una democracia sin partidos políticos, que no los creía necesarios. Más aún, los temía, impresionado probablemente por la convulsionada Europa de entonces. Temía lo que él llamaba «espíritu de partido», que tiende a sustituir la voluntad delegada de la nación por la voluntad de una minoría de políticos hábiles y emprendedores y con el éxito alternativo de diversos partidos, convertir a la administración pública en el espejo de las aspiraciones de unos y de otros en sustitución de los intereses nacionales, agravándose con las represalias y venganzas que pueden conducir a una situación de anarquía.

En nuestro país, en los pródromos de nuestro constitucionalismo, decía, esta situación se repite como un paradigma perfecto: Justo José de Urquiza tenía el mismo concepto sobre los partidos políticos. En su mensaje del 22 de octubre de 1854, también recordado por Romero, acusaba iguales males cuando decía: «Los argentinos, envueltos en prolongadas y frecuentes tempestades, se han visto arrastrados por diferentes caminos. No nombraré los partidos, ni siquiera el giro de las diferentes facciones que los han dividido. Pero lo que hace al caso decir es que cada facción ha traído su desgracia, cada partido su catástrofe.» Y agrega el autor citado, comentando el concepto, que estas ideas sin duda inspiraron su famosa frase: ni vencedores ni vencidos; fusión de todos los partidos.

Por eso nuestra Constitución de 1853 no nombra a los partidos, ni les da entidad constitucional. Pero ese hecho no significa, por cierto, que los prohíba, porque reconocen su origen legítimo en el derecho de asociación que consagra el artículo 14 y, desde luego, en el artículo 33, porque allí encuentran su origen todos los derechos que emanan de la soberanía del pueblo.

Al margen de este encuadramiento en la norma y en la doctrina, los partidos políticos fue-

ron, desde los inicios de la nacionalidad —como también se recordó en la sesión de ayer— una expresión pujante, fervorosa, desarticulada e inorgánica en un comienzo, patriota las más de las veces, luchando cada cual por su verdad, quienes conformaron la vida pública argentina.

Carlos R. Melo, erudito jurista de nuestro derecho público ha sintetizado en muy breves frases cómo, al margen de esta ausencia de mención que de los partidos políticos hace la Constitución, existen, adquieren vigencia, actúan, se desarrollan y protagonizan hechos decisivos de nuestra historia.

El doctor Melo dice: «La cuestión de la capital de la República en la primera época; la libertad de sufragio y la representación de las minorías en una segunda época y, por último, la adopción de los progresos sociales, políticos y económicos alcanzados por otros pueblos señalan, a mi juicio, etapas decisivas en la orientación y formación de los partidos políticos argentinos.»

Luego de la primera guerra mundial, lo expuesto adquiere vigencia mucho más clara en el pensamiento del mundo. Se inicia el movimiento de constitucionalización de los partidos políticos y la mayoría de los textos constitucionales contempla esta realidad, que es inherente a la problemática y a las bases sustentadoras mismas del Estado.

En nuestro derecho público interno, y a favor de su evolución, los partidos políticos están receptados o institucionalizados en una serie de constituciones de provincias, como la de Córdoba en su artículo 23, la de La Rioja en su artículo 33, la de Santiago del Estero en su artículo 39 y, desde luego, en las Constituciones de las nuevas provincias patagónicas, que traen normas explícitas y concretas, como la del artículo 28 de la Constitución del Neuquén, el 141 de la de Río Negro y el 242 de la del Chubut.

En la legislación nacional argentina, es ésta la primera vez que tiene estado de debate parlamentario un proyecto de ley orgánica de los partidos políticos. Esta legislación reconoce sí frondosos antecedentes, que los tengo sobre mi banca prolijamente compilados, pero que, desde luego, no tendría sentido ahora su mención, pero que, en síntesis, no son más que anhelos y aspiraciones de legisladores y titulares del Poder Ejecutivo que tuvo el país.

Todos esos antecedentes, sin excepción, se han frustrado en sus posibilidades, y el país ha quedado detenido en esta materia. Ahora, un poco urgidos por las sesiones extraordinarias, nos vemos abocados a este trascendental debate. ¿Por qué se han frustrado estos antecedentes? Un poco porque la mentalidad jurídica del país no había madurado lo suficiente como para receptar a estas importantes fuerzas sociales que hacen a la problemática misma del Estado, y otro poco —esto es fundamental— por una razón de falta de moralidad general en la inspiración que ha tenido este tipo de legislación.

Por lo general, se lanzó esta legislación a la consideración del país respondiendo a los intereses circunstanciales del sector político dominante en la política nacional del momento o por que su espíritu estaba penetrado por el signo de la persecución, la represión arbitraria, la intolerancia o, en última instancia, la ventaja para una parcialidad actuante en el país.

Esta falta de contenido ético de que ha adolecido la más reciente legislación sobre la materia, es lo que ha determinado fundamentalmente su naufragio. Nosotros, por el contrario, ponemos el acento en los aspectos morales de nuestra concepción política y aspiramos, precisamente por eso, en plenitud de sentido moral, a que este estatuto, esta ley orgánica sea el instrumento idóneo que el país requiere para encauzar a estas formas sociales que son los partidos políticos cuya influencia decisiva en la vida del país se ha destacado.

Aspiramos a que este proyecto sea tratado con una gran buena voluntad en este recinto, en la misma forma en que pudimos obtener, a veces, de los antagónicos más extremos, un criterio de conciliación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que se ha traducido en un despacho firmado prácticamente por unanimidad, con las disidencias naturales y lógicas que hacen a la reserva espiritual de cada uno de los sectores.

Pero queremos que esa ponderación se refleje aquí, como una manifestación de voluntad común de construir, y que, descarto, existe en el espíritu de los señores legisladores, para seguir avanzando en la elaboración de las nuevas formas que está requiriendo la Argentina.

No puedo dejar de decir que a favor de los vaivenes de la política militante se ha procurado desdibujar el juicio favorable que mereció el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Quizás el pensamiento auténtico de algunos sectores políticos, en un primer momento de espontaneidad, natural después de tantos años de represión contenida en este tipo de leyes, está en aquellas manifestaciones que a comienzos de este año recogió la prensa del país, cuando hicieron un elogio rendido y cerrado de la legislación proyectada por el Poder Ejecutivo, reconociendo el alto espíritu de justicia, de equilibrio, ponderación y respeto a los derechos y a la libertad que la inspiraba.

Por eso, ahora, sobre el filo de la discusión, cuando naturalmente resulta más comprometedora repetir esas expresiones que, en algún momento —esto no puede ser desmentido—, sintetizaron la opinión de los partidos políticos argentinos, séame permitido a mí, oficialista de la Unión Cívica Radical, expresar el alto mérito que corresponde al Poder Ejecutivo y al ministro del Interior, por la remisión de este proyecto, con lo cual han contribuido a elaborar una auténtica ley orgánica de los partidos po-

líticos que permitirá disponer del instrumento idóneo, justo, con autenticidad moral, que permitirá realizar los fines que necesitan ser cumplidos en el país.

Era y es imperioso, mediante una mínima intervención en los partidos políticos, llegar al dictado de esta legislación. Es necesario normativizar legislativamente las funciones y la existencia de los partidos. Esto es más evidente en el Estado moderno en que nos ha tocado vivir. Hasta cierta etapa de la vida del país y del mundo —quizá no estemos todavía en condiciones de decir con claridad meridiana hasta qué fecha— ha actuado en el escenario político el partido de representación individual, es decir, el partido que en vísperas comiciales se limitaba a nominar candidatos, los que, una vez elegidos en virtud del juego electoral, quedaban luego librados a su propia conciencia para desempeñar la función. Hoy, ese tipo de partidos está desapareciendo en los países —y yo diría que en el nuestro ya no tiene ninguna vigencia— para ser reemplazado por lo que Duverger llama «el partido de integración social», como oponiéndose al anterior, es decir, el partido que participa en forma amplia en todos los estratos de la vida social; que tiene un alistamiento clasista de la población girando alrededor de él; que tiene una influencia, precisamente por esto, decisiva en la comunidad en que actúa; y que tiene una vigencia diaria en el mundo moderno. Esta es la realidad del partido político moderno. ¿Cómo dejarlo, entonces, sin apresarlo en los cauces orgánicos de la legislación y decir que cualquier legislación de este tipo —como se ha dicho— es nada más que un compromiso para salir de la coyuntura actual que vive la República? Niego terminantemente este concepto, porque estamos en la inteligencia de elaborar un quehacer superior y algo de real trascendencia para el país.

Hemos tenido cuidado en la redacción del despacho para que la ley penetre —digo esto con términos literales que interpretan acabadamente mi pensamiento— el mínimo indispensable en la vida interna de los partidos. Hemos pensado que es necesario encauzar los tipos de dirigencia que tienen los partidos. No deben repetirse, estén donde estén, sin ninguna alusión preconcebida, los partidos de dirigencia personal, que se oponen por definición a los partidos de dirigencia institucional. Y en esto no entro a analizar los conceptos, porque los términos están definiendo a unos y a otros. Baste decir solamente que la ley debe dictarse para que la dirigencia personal, que se identifica con la dictadura, no pueda tener vigencia ni implantación en la vida del país, y para que esas expresiones populares, auténticas, con emoción, con cariño de pueblo, dispuestos a todos los cambios de estructuras que sea necesario debatir en este recinto de la República, tengan, sí, una dirigen-

cia institucional, que es, en definitiva —los hechos en el mundo confirman la experiencia—, **lo único** que autoriza y da base perdurable, permanente a las fuerzas y tendencias políticas.

El despacho que estamos considerando, en el inciso c) del artículo 3º —esto no significa de ninguna manera anticipar su discusión en particular—, establece la necesidad de que los partidos políticos se den una «organización estable y funcionamiento reglado por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma que establezca cada partido. La trascendencia del debate y de los partidos la encuentro reiterada en la cita de Burdeau, cuando sostiene que todas las tendencias que se enfrentan en la vida política se expresan a través de los partidos, lo que viene a ser la forma concreta de los poderes, la figura tangible de las ideas de derecho, el instrumento por el cual el individuo tiene el sentimiento de participar en la vida política. Especialmente es uno de los agentes más activos de cohesión social, moralmente es uno de los últimos refugios del ideal político; es el motor de la vida pública.

Por ello, es necesario que fijemos —y repito un concepto anteriormente expuesto— el lugar y las responsabilidades que les corresponde a los grupos de presión. Y al señalar esto no soy original, porque ha sido afortunadamente advertido con toda precisión por oradores anteriores. Es necesario que fijemos el lugar y las responsabilidades que les corresponden en nuestro orden social a los grupos de presión y grupos de interés, que son una realidad tangible que nos está rodeando a diario en nuestra vida de relación, so pena de que la sociedad contemporánea se deteriore y deforme hasta el punto de convertirse en un neofeudalismo de tales poderosas formaciones sociales.

Sánchez Agesta, el juspublicista español, refiriéndose a estas cosas de que estamos hablando aun a riesgo de repetición, dice lo siguiente: «Los partidos políticos son ingredientes irremplazables del diálogo que la democracia supone. Por eso el partido único es expresión casi siempre del monólogo oficial. Pero el grupo humano para llegar a ser partido político, requiere dos elementos: comunidad de ideales y propósito de conquistar el poder, es decir, una doble finalidad ideológica y práctica. El programa político contiene el ideario, las convicciones comunes y los fines concretos que el partido se propone realizar.»

Estos criterios, en líneas generales, están receptados en los artículos 2º y 3º del despacho de la mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. Pero hay uno de ellos que seguramente va ser el que motive el núcleo axil de los debates de esta Cámara durante la discus-

sión en particular. Los propósitos que se han enunciado con respecto a este despacho; lo que es fundamental para la dinámica sustancial del estatuto, son las disposiciones contenidas en el artículo 3º, inciso b), conexo con el artículo 22.

Nosotros hemos suscrito sin retaceos de ninguna naturaleza este tipo de legislación, porque estamos seguros y tranquilos de nuestros actos políticos. Los que no están seguros son algunos que todavía no interpretan en profundidad el espíritu del partido que gobierna y la pureza de sus intenciones.

Las expresiones de los artículos 3º, inciso b), y 22, resguardan, a nuestro juicio, lo que el autor inglés Bagehot llama, con denominación muy precisa, la parte imponente de la Constitución, que para otros autores es la parte dogmática. Yo me reservo un poco para aludir sobre este asunto en la discusión en particular. He de demostrar que la justificación de este tipo de legislación no es creación de años recientes, sino que la existencia de estos recaudos que hacen a la parte imponente de la Constitución, o parte dogmática, están enraizados con pensamientos vertidos ya en el siglo pasado, en jornadas memorables de nuestra organización nacional. Por el momento sólo he de decir que esa parte imponente o dogmática de nuestra Constitución constituye como un derecho supraconstitucional, anterior y colocado por encima de la Constitución, y si la Constitución no se encuadrara estrictamente en la esencia de ese derecho, pensamos que carecería de la legitimidad suficiente para ser la Carta Magna que organiza políticamente al país. Pero ya hablaremos de este aspecto, y veremos la filiación de nuestro pensamiento con el que expresara Sarmiento en la Convención provincial de Buenos Aires de 1860 y Mitre en los debates de la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires de 1870.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia lamenta informar al señor diputado que ha vencido el término que el reglamento le acuerda para su exposición. Lo invita, entonces, a completar en breves momentos su pensamiento, a fin de ajustarlo al criterio establecido ayer por la Honorable Cámara.

Sr. Bogliano. — Que se le prorrogue el plazo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se resolvió que no se prorrogarían términos, señor diputado Bogliano.

Sr. García. — Yo también voy a hacer una invocación a la benevolencia de mis colegas, y descarto que he de recibir el mismo trato que el señor diputado González Bergez, quien hizo similar invocación.

Sr. Rouzaut. — Solicito se acuerde una prórroga de un cuarto de hora al señor diputado para que pueda concluir su exposición.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento, se acordará una prórroga de un cuarto de hora al orador.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Esta lógica e ineludible limitación del tiempo —que la comprendo perfectamente bien— hace que deba omitir otros aspectos de mi exposición para limitarme a sostener, dentro de las mayores posibilidades de síntesis, nuestras disidencias parciales, en forma muy somera y esquemática.

Una de esas disidencias se funda en la circunstancia de que, fieles a una vieja concepción de nuestro partido, incorporada desde hace rato a la vida interna de la agrupación, hemos de afirmar, en la medida de lo razonable para los otros partidos políticos que no lo tienen establecido, el principio del voto directo en la nominación de autoridades y candidatos. Para nosotros este principio tiene una importancia sustancial, por cuanto su implantación significó una de las aperturas más eminentes hacia el estado democrático en los partidos políticos, procurando la vigencia, lo más perfecta que se pueda, de la democracia en la vida interna de estos organismos. Naturalmente, auspiciamos este principio limitado, desde luego, a las bases del partido, porque esto, que para nosotros es un dogma, no pretendemos trasladarlo, en una interferencia que no correspondería, en forma irrazonable, a los otros partidos que tienen otros sistemas; pero como principio y como vigencia que hace a las bases del partido, lo hemos de sostener y defender como disidencia parcial.

A diferencia del señor diputado Gómez Machado, creemos que el espíritu confesado, sin ninguna duda, de esta legislación que proyectamos es el de dar fortaleza, entidad, robustez y un perfil de poder a los partidos políticos, ahora que los institucionalizamos en la vida pública argentina. Concebimos a las jerarquías de la República en función que excede los merecimientos, por muy respetables que sean, de un hombre, para hacerlas fincar primordialmente en el partido político. Es decir, imponemos, de acuerdo a esta disidencia, si prosperara, la obligatoriedad de ser afiliado a un partido político para postular la nominación, porque entendemos que a esas altas jerarquías puede llegarse mejor, y con resultados más felices para la organización institucional, a través de cauces poderosos, de cauces importantes, de cauces a veces históricos, con una significación propia, intransferible en la vida del país, como son los partidos políticos, y no cuando es la resultante, el solo evento de una conjunción transitoria que puede realizarse alrededor de una persona, por más luminosa que sea su personalidad en la vida política de la República.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor Teodosio F. Pizarro.

Sr. García. — Nos oponemos a la constitución de las alianzas transitorias; y esto define la intransigencia, piedra bautismal de la Unión Cívica Radical, ese innato rechazo de las alianzas, de las concomitancias electorales con otros partidos políticos. Y que no se confunda esto con una expresión de primitivismo político, porque la intransigencia radical fue siempre una expresión de celo, de cuidado amoroso, si se quiere, de nuestros propios ideales, respetando los demás, y no una expresión de intolerancia en las costumbres políticas.

Consecuentes con estas postulaciones, es que hemos de sostener esta disidencia parcial al despacho.

Sr. Musacchio. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. García. — Sí, señor diputado.

Sr. Musacchio. — Quiero decir que las expresiones que está vertiendo respecto de las alianzas no están de acuerdo con la política que desarrolló el radicalismo del pueblo y las que, naturalmente, tuvo que realizar para llegar al gobierno de la Nación. Es decir, que se mantienen dos criterios dispares: por un lado, está contra las alianzas en el estatuto, y por otro, la asunción al poder se produce como consecuencia de alianzas políticas realizadas antes del acto comicial.

Sr. Fernández (R.). — Eso es falso.

Sr. Muniagurria. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado García?

Sr. García. — Sí, señor diputado.

Sr. Muniagurria. — Encuentro muy razonable que el señor diputado García, en nombre de su bloque, se pronuncie contras las alianzas posibles, pero el estatuto no determina que esas alianzas sean obligatorias. ¿Por qué quiere imponer el criterio político de su partido a los demás grupos políticos? No es imperativo realizar las alianzas, y si al Partido Radical del Pueblo no le gusta hacerlas, que no las haga, y todos quedaremos satisfechos.

Sr. Presidente (Pizarro). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Desde luego, señor diputado, que no se trata de imponer a los restantes partidos lo que nosotros exclusivamente sentimos y queremos para nosotros, pero creemos que, en términos generales, las alianzas —y en este momento hay una a la que me permito rendir mi homenaje, como fue la alianza socialista-demócrata progresista, de 1931—, de acuerdo a las experiencias realizadas y algunas a medias en el país, son hechos no felices, por lo menos, que no favorecen el desarrollo ordenado y correcto de la vida pública argentina. Eso por un lado. Por otro lado, y referido a la interrupción del señor diputado Musacchio, es notorio que la

inteligencia del señor diputado no habrá confundido, desde luego, la exposición fundamentada de lo que estimo ha sido y es la intransigencia del partido que represento en esta banca, que se opone, en función del fundamento que he dado, a alianzas electorales para el comicio, con la necesidad de convivir en los colegios electorales e, inclusive, en esta misma Cámara, para poder marchar adelante y realizar lo que es indispensable en la legislación del país y en todos los actos relacionados con su vida.

Sr. Musacchio. — No me he confundido.

Sr. García. — La asimilación que ha pretendido realizar el señor diputado es como si nos manifestara que los radicales de este sector estamos abjurando de nuestra intransigencia porque participamos de la representación proporcional en este instante con otros doce sectores políticos.

Sr. Zarriello. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. García. — Sí, señor diputado.

Sr. Zarriello. — Además, quisiera agregar que nosotros no hemos ido, absolutamente, a ningún tipo de alianza. El régimen proporcional obligó a la Unión Cívica Radical del Pueblo a bregar por el respeto de la mayoría. Nosotros reclamábamos que debía votarse por la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo porque en los colegios electorales de todo el país habíamos obtenido mayoría. En aquellas provincias donde obtuvo la minoría respetamos la proporcionalidad y aceptamos votar por el partido mayoritario.

Sr. Musacchio. — En la provincia de Buenos Aires está la muestra cabal...

— Hablan a la vez varios señores diputados.

Sr. Presidente (Pizarro). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García, a quien la Presidencia le solicita no admita interrupciones.

Sr. García. — Por todas estas razones que hemos dado y además porque el despacho de la mayoría, fundado sustancialmente en el proyecto del Poder Ejecutivo, constituye un cuerpo de legislación limpio y honesto, cuya fiel aplicación —sin ninguna duda— va a sanear los aspectos desdichados que todavía quedan —y muchos— de nuestra vida política nativa, mediante la leal aplicación por todos los partidos políticos, por los señores jueces de la Nación, por el Poder Ejecutivo, titular del poder de policía, por el partido oficialista y por los otros que han suscrito también el despacho, incluso aquel que sugiere dudas veladas o que se sugiere a sí mismo como destinatario de algunos supuestos, normas arbitrariamente represivas; por la leal aplicación que todos hagamos de esta norma cuyas conclusiones se verán a través de nuestros futuros eventos políticos, después de largos años de desencuentro que nos vienen separando, de intolerancia, de resentimientos y de arduos enfrentamientos; por todo

ello, cuando nos sometamos todos a la ley con grandeza de alma, el enfrentamiento será fraterno y nada más que una expresión circunstancial en la vida argentina. Por otro lado, nuestro voto custodia, con la fundamentación que también he dado hace un rato, el tradicional estilo de vida argentino, en el que nadie puede pretender, a esta altura de la vida política del país, que sea apartado de los cauces de libertad, de justicia, de igualdad y de democracia, que sí tienen un sentido, a pesar de que para algunos espíritus en el debate de esta tarde aparecen como palabras sin sentido, pero que para nosotros lo tiene en profundidad, en plenitud. Y terminará, como ha dicho bien el señor diputado González Bergez, con lo que fue el bochorno, el escándalo de los últimos años de la vida política argentina, con lo que fue el negocio de los votos de los proscriptos, que llevó a la formación de pactos y de frentes, para luego, en marchas y contramarchas, movidas por hechos también desgraciados en la vida nacional, concluir en el precipicio donde nos encontrábamos los argentinos en 1958, y cuyas consecuencias se vivieron hasta nuestro advenimiento al poder.

Todo eso ha de concluir con la aplicación leal y honrada que yo reclamo para todos y que antes que a nadie lo impongo para mí...

Sr. Presidente (Pizarro). — Ruego al señor diputado García poner término a su exposición, porque ha vencido el plazo de que dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. García. — Concluyo, señor presidente.

Para nosotros este proyecto de estatuto de los partidos políticos tiene un profundo significado. Decimos y declaramos con gran honradez de alma que significa de nuestra parte el cumplimiento del compromiso que adquirimos oportunamente con la ciudadanía, de terminar con las proscripciones electorales.

Por esa razón, porque para nosotros política es una concepción ética de la vida y del mundo —lo dice nuestra profesión de fe doctrinaria que cautelamos cuidadosamente—; porque aspiramos a que sobre esa base ética, como dije al comienzo de mi exposición, se cimente la grandeza de nuestro destino nacional, hemos de votar con fervor y autenticidad las instituciones fundamentales recogidas en este despacho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Pizarro). — Tiene la palabra el señor diputado Christie.

Sr. Christie. — Mi intervención en este debate, a esta altura de la discusión en general, no tiene sino por objeto fijar la posición de nuestro bloque en uno de los aspectos que conciernen al estatuto en su concepción total.

Cuando suscribí el dictamen de la comisión —lo hice en disidencia parcial—, tuve el propósito de fijar un concepto acerca del estatuto de los partidos políticos que considera la Cámara. Y este propósito tiene para nosotros una alta significación, toda vez que trata de fijar el obje-

tivo que persigue este estatuto: el objetivo que se enuncia en el artículo 1º y que ha sido motivo, precisamente, de la iniciativa de nuestro bloque con respecto a su modificación.

El artículo 1º dice que se garantiza a los ciudadanos el derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos. Nosotros pretendemos que este estatuto no sea simplemente la reglamentación del derecho de asociación con fines útiles que consagra la Constitución Nacional en su artículo 14; queremos que sea también un instrumento de defensa de la democracia.

Los pueblos viven en estas épocas asediados por los enemigos de la libertad y aquí, en la República Argentina, el aire que se respira no es tan libre ni exento de peligros como para que los hombres democráticos no nos armemos suficientemente de espíritu y coraje, no sólo para reglamentar la vida de los partidos políticos, sino también para defenderla. Este es el objetivo fundamental que perseguimos con el dictamen en disidencia, que puede ser objeto de consideración en la discusión en particular, pero que como afecta al estatuto en sus finalidades, hemos entendido conveniente considerarlo también en este momento en que se está tratando en general el despacho. Tenemos también algunas otras observaciones que formular, que serán puntualizadas oportunamente en la discusión en particular.

Los partidos políticos argentinos han venido desenvolviéndose desde que existen al amparo de normas internas y respetando por supuesto las disposiciones constitucionales y leyes dispuestas que se refieren al derecho de asociación. Pero en los últimos tiempos, y pasando por alto muchas iniciativas que respecto de su institucionalización se presentaron en este Congreso, se ha creído conveniente someterlos a normas de organización y funcionamiento cuyo conjunto se ha denominado Estatuto de los Partidos Políticos.

¿Qué razones han determinado esta intromisión del Estado en la vida jurídica de los partidos políticos? Precisamente la conveniencia de regularizar la vida de estas instituciones que tanta importancia tienen para el país y para la ciudadanía. En realidad, los partidos políticos deben ser considerados con la máxima atención, toda vez que constituyen el presupuesto indispensable de todo Estado organizado bajo el sistema democrático de gobierno.

En la Argentina, desde que nos constituimos como nación, se ha hablado siempre de la existencia de dos partidos políticos, de dos tendencias, dos corrientes de ideas que nos vienen desde el momento mismo del pronunciamiento de Mayo y que se singularizan —excúsenme esta elemental referencia— en la personalidad de los próceres Moreno y Saavedra. Moreno, el hombre fogoso que quería resolver todos los problemas con celeridad y hasta con violencia si hubiera sido necesario, y Saavedra, el hombre

temperante, que pensaba que se podía llegar al mismo fin con más templanza y prudencia.

Estas dos corrientes, que traigo a colación en esta exposición —que he de tratar que sea lo más breve posible porque no tiene otra razón de ser que sentar la posición de nuestro partido respecto de la finalidad del estatuto de los partidos políticos—, estas dos tendencias, aunque orgánicamente no revistieron el carácter de partidos políticos tal cual nosotros los concebimos, significan dos corrientes de ideas democráticas que trataban de solucionar los problemas que se presentaban a los hombres de la Revolución de Mayo dentro del ambiente de libertad que prevalecía en ese instante.

Al solo efecto del mejor esclarecimiento del concepto que deseo dejar bien sentado en este debate, voy a recordar la opinión de un historiador de la época de Mitre que escribió un libro sobre Rosas y que tiene en sí el valor de su magnífica biografía. Me refiero a Manuel Bilbao, que expresa su desacuerdo con el criterio dominante entonces, y aun hoy, de que sólo dos partidos políticos nacen con la Revolución de Mayo y se proyectan en la historia de los partidos políticos argentinos.

Manuel Bilbao señala que existía un tercer partido político que representaba las ideas de la colonia, las ideas feudales. Ese partido se exterioriza —dice— en las reacciones de los partidarios de la monarquía inmediatamente después del pronunciamiento de Mayo. Luego en acecho, agazapado, aparece redivivo en la personalidad de Juan Manuel de Rosas, tan pronto como éste irrumpe en el escenario político argentino. El autor señala un criterio exacto en cuanto anotaba una tercera corriente de opiniones en algún grupo de hombres de la época. Es exacta su opinión en cuanto a que esa corriente existía antes de la revolución, durante la revolución y en la época de la tiranía. Yo agregaría que continuó subsistiendo después, que existe ahora y que existirá siempre, porque frente a la democracia no desaparecerá jamás el enemigo que precisamente le da razón y vigencia a la libertad del hombre y de los pueblos. Pero no participo de la idea de que esa corriente tuviera el carácter de partido, conforme a la concepción democrática, que es, por lo demás, la única admisible cuando de partidos políticos se habla. El bloque de UDELPA está totalmente de acuerdo en que sin partidos políticos no es posible la existencia de la democracia. Pero es necesaria la existencia de partidos políticos que revistan el carácter de democráticos —repetimos—, porque todo movimiento de ideas que repugne a la concepción de la libertad está fuera del ámbito de este sistema. Afirmamos con toda tranquilidad de conciencia que ningún partido que reniegue de la democracia puede tener cabida dentro del ámbito electoral argentino. Ningún argen-

puede pretender que un movimiento anti-democrático participe en las luchas cívicas, pues ellas hay que avenirse a discutir ideas en la arena de la libertad, donde puede lograrse la maravilla de la luz que ilumina la verdad. Nosotros queremos dejar bien sentado este criterio, porque mañana el Estatuto de los Partidos Políticos ha de interpretarse por los encargados de hacerlo, los jueces, y estos deben tener muy presente que un partido totalitario, que por tal se considera dueño y depositario de la verdad y de todas las ideas, no puede en modo alguno participar en las luchas cívicas argentinas.

Aclaro que en esto no hay alusión a partido, agrupación o persona alguna del momento actual que vive la República. Se trata de ideas que tienen vigencia en lo abstracto y que sólo llevan el propósito de sentar decididamente una posición. La defensa de la democracia, más que el reglamentarismo del derecho de asociación, que hace este estatuto de los partidos políticos, que consideramos a través del proyecto del Poder Ejecutivo, es lo que nos preocupa. La democracia está permanentemente amenazada, y no se la amenaza de frente, sino solapada y embozadamente. Los tiempos han cambiado mucho, por lo menos en la Argentina. Las agrupaciones del jaez más totalitario se revisten paladinamente de los atributos democráticos.

Un autor dice, refiriéndose a los principios de la democracia: «Con una impudicia sin par aquellos mismos que la pisutean no cesan de invocarlos y de adjudicarse ideas: democracia, libertad, etcétera, cuya ruina consagraría el reino que piensa instaurar.» La lucha, en consecuencia, debe seguir, pero en condiciones más desfavorables para los hombres de la libertad en estos tiempos. Su adversario se presentará ataviado de mil maneras, con las más disímiles máscaras. En cuanto a métodos, la astucia puesta al servicio de tales causas no agota ni agotará jamás la más afiebrada imaginación. Por eso, el hombre democrático, el hombre de la libertad, está obligado a erigirse en permanente vigía y a estar siempre dispuesto a la lucha. Es la lucha de todos los días, de todas las horas; es la lucha activa, no pasiva, aunque no hay razón para descender a la agresividad alevé y traidora que nunca se conciliará con la moral y con la nobleza del hombre libre.

Por eso también nuestra actitud, señor presidente, en el sentido de que este estatuto sea un instrumento de defensa antes que reglamentario, rutinario, adecuado a este tipo de organizaciones. Nosotros creemos en el hombre como la expresión más sublime de la creación. Dotado de inteligencia, es capaz de elevarse más y más en el intento imposible de alcanzar la perfección, por muchas dificultades que se opongan a su majestuoso ascenso. Creemos en el hombre como expresión de la creación, ca-

paz de las mayores realizaciones, sin trabas de ninguna naturaleza, fuera de aquellas limitaciones impuestas por la convivencia en la sociedad a la que pertenece. Porque creemos en el hombre argentino como síntesis de todas esas virtudes es que consideramos que hay que defender al hombre, expresión auténtica de la libertad, expresión de lo más sagrado que Dios ha podido crear.

Nosotros creemos en todo ello, y creemos también que el hombre argentino es el hombre de y para la libertad, y no para experiencias extravagantes, llevadas a veces por el desvarío o impulsos satánicos, no fáciles de explicar. El caso es que en la República Argentina todo está a nuestro alcance; no tenemos problemas internacionales de vieja data, como sucede en algunos países de la vieja Europa, que se renuevan frecuentemente; disponemos de todo cuanto la naturaleza, pródiga como ninguna otra fuerza, nos coloca a nuestro alcance; tenemos un elemento humano maravillosamente dotado. Esto es verdad. Pero yo me preguntó: ¿cómo es posible que alguna vez grupos de hombres, seguramente equivocados, puedan haber cometido la herejía de imitar regímenes que nada, absolutamente nada, tienen que ver con la Nación Argentina? ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, el nazismo y el fascismo con la generosidad magnánima de San Martín? ¿Qué tuvo que ver cualquiera de esos regímenes con la avidez de progreso de Bernardino Rivadavia, con el anhelo de superación cultural que soñara e inquietara permanentemente a Domingo Faustino Sarmiento durante toda su gloriosa vida? ¿Qué tenían que ver esos regímenes con la Nación Argentina? Sin embargo, hubieron mentalidades extraviadas que trataron de imponer esos sistemas contra la voluntad del pueblo de la Nación.

Creemos que con auténtica vocación argentina no debemos jamás abandonar nuestro puesto de lucha, montando permanentemente guardia en defensa de la democracia, que es defensa de la libertad.

No nos interesa el juicio de los enemigos de la libertad acerca de esta posición defensiva. Sabemos que una dialéctica habilidosa conduce, a veces, a la confusión o perturbación de espíritus débiles o indecisos. Se nos dirá por qué, si la democracia es libertad, no se admite la discusión de las ideas antidemocráticas. Al respecto, contestamos: no tenemos ni a la discusión ni al triunfo de nuestra causa en el enfrentamiento; pero, eso sí, no vamos a cometer la ingenuidad inexcusable de permitir la entrada a nuestra pacífica y desguarnecida morada del bandolero que se acerca a ella, armado hasta los dientes, disimulada u ostensiblemente, con el propósito hasta de robarnos a nuestros hijos.

El peor mal que padece el mundo, ha dicho Romain Rolland, no es el poder de los malos sino la debilidad de los buenos.

Hacer de la democracia un dogma a punto tal que en nombre de la libertad se permita, incluso, la libertad de sus enemigos para que la destruyan, es, como ha dicho Kelsen, el paradójico privilegio de la democracia de poder darse a sí misma la sentencia de muerte con sus propios métodos de elaboración de voluntad política, esto es, por medios legales. Si se me pregunta: ¿puede un grupo de hombres formar una agrupación para reformar la Constitución e instaurar una monarquía? Yo contesto: siempre y cuando esa reforma no atente contra la libertad del pueblo y los derechos humanos, no habría inconvenientes; pero allí donde solapada o francamente se quiera conducir al pueblo a un estado de esclavitud, antigua o moderna, los hombres de la democracia lo impediremos con toda la fuerza de que dispongamos.

Por eso, dentro del Estatuto de los Partidos Políticos, no cabe ninguna agrupación con el carácter de partido que pueda atentar contra la libertad del pueblo.

Señor presidente: he querido hacer estas apreciaciones para que conste nuestra clara posición al respecto y para que los jueces, reitero, en la aplicación del Estatuto de los Partidos Políticos, sepan cuál ha sido el pensamiento de esta Cámara a través de la opinión de los distintos sectores que la integran. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pizarro). — Tiene la palabra el señor diputado Bogliano.

Sr. Bogliano. — Señor presidente: como autor de un proyecto de observaciones al orden del día 417 voy a fundar las motivaciones que lo inspiran. Si bien las observaciones se circunscriben categóricamente al inciso b) del artículo 3º y a los artículos 21 y 22 del despacho, ellas entrañan, en el orden de la filosofía que las orienta, la discrepancia más absoluta, y entiendo que deben ser aprehendidas y aceptadas por la comisión para bien de los propósitos que se invocan en el proyecto.

Es evidente que toda ley sobre organización de los partidos políticos debe inspirarse en la necesidad de la defensa de la libertad del hombre. Al decir de José Manuel Estrada, toda la ciencia política está contenida en la idea de la libertad, no solamente en la libertad psicológica que responde a los factores vivientes del fuero interno, sino también a la libertad política, que se concreta con la primera y el auxilio de la memoria y de la inteligencia tendiente a la formación de un acto volitivo que determine en el hombre la expresión más clara y cabal de su voluntad.

Los artículos que se mencionan en el capítulo de las observaciones constituyen el hecho fundamental de nuestra impugnación, porque no dudo en afirmar que pueden llegar a tergiversar de modo categórico toda la filosofía de libertad que inspira esta ley.

Estoy conteste en que el derecho del hombre en cuanto a la libertad debe ser legislado, pero

entiendo que si bien los derechos no son absolutos, de ninguna manera es posible la sanción de reglamentaciones que frustren la posibilidad del ejercicio de esa libertad. Los artículos que cuestiono están imbuidos de un concepto que se torna peligroso para la libertad que se busca proteger. El inciso b) del artículo 3º, que habla de la existencia de los partidos políticos, se refiere concretamente a: la «doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez que propugne expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano, y el de los principios y los fines de la Constitución Nacional». Y los artículos 21 y 22, relativos a la declaración de principios, programas o bases de acción política, establecen que a los efectos de determinar cómo se cumplen las condiciones fijadas, «se consideran violatorios del régimen democrático la promoción, especialmente, de los siguientes hechos y actos», y a continuación se enumeran dichos hechos o actos en los incisos que van desde a) hasta k).

Evidentemente se trata de un articulado que forja una legislación de tipo casuista, subjetivo, ambiguo, y que permite introducir el principio de la legislación analógica, proscrito, por cierto, en la esfera del derecho penal en virtud de aquel principio del derecho romano: *Nullum poena; nullum crimen sine previa lege penale*. Evidentemente, de ahí surge el concepto, y es evidente también que de la lectura de los incisos y artículos a que me he referido surge meridiana la noción de la ambigüedad y el concepto subjetivo que permitirá al juzgador establecer en su oportunidad si determinados conceptos o determinados programas volcados en la plataforma de un partido político pueden constituir las especies concretas que determina la ley.

¿Cuál es en este momento la opinión del legislador frente a este concepto? ¿Cuál sería la interpretación del juzgador frente a los hechos que se establecen como motivantes de la ley? Evidentemente, el legislador busca dar al pueblo una ley orgánica de los partidos políticos que respete en plenitud la voluntad del hombre y del ciudadano. ¿Y cuál sería el concepto del juzgador sobre aquellos hechos que pueden en su inteligencia determinar en un momento dado su posición especial sobre la noción de la democracia o del gobierno republicano? Esto crea, a nuestro entender, un serio obstáculo para la garantía absoluta de imparcialidad del precepto legal. En la sesión de ayer el señor diputado Musacchio, y en la de hoy el señor diputado Vedia, se han referido a este aspecto de la cuestión, con referencia expresa al apartado primero del artículo 22. Yo pregunto, entonces, ¿cuál podría ser en la posición de un juzgador la tesis del gran constitucionalista García Peylayo cuando en su obra de derecho constitucional habla de la crisis del derecho liberal burgués? Yo pregunto: ¿cuál podría ser la posición de la

doctrina de un partido georgista, por ejemplo, frente al sentido democrático que puede darle en un momento determinado un juez? ¿Cuál sería la posición, frente a este texto legal, de un partido que intente, como ya lo han intentado en el país, establecer el régimen unitario de gobierno? ¿Cuál sería la posición de un juez frente a un proyecto de reforma agraria, que estudie y analice el régimen de la propiedad privada? ¿Cuál sería el concepto del juez que analizara el problema con la mentalidad del año 1870, de Vélez Sarsfield, o cuál sería la solución del juez si lo analizara con el espíritu y con la inteligencia de Juan B. Justo?

Son casos que determinan la posibilidad de tremendas confusiones; son casos harto peligrosos, que por cierto la doctrina ya los ha analizado con prudencia.

Tengo sobre mi banca un párrafo de Luis Jiménez de Asúa, de su *Tratado de derecho penal*, quien refiriéndose a este aspecto de la cuestión en las legislaciones totalitarias, que introdujeron también el concepto de este tipo de filosofía en soluciones subjetivas, dice con claridad meridiana: «El arbitrio judicial que feneció a manos de la Revolución Francesa, resucita modernamente. Los fantasmas vuelven. Al postular hoy la falta de movimientos del juzgador, resurgen los riesgos de la injusticia y de los atropellos de antaño. El arbitrio judicial resulta el más agudo riesgo para la libertad de los individuos, ya que el juez, en la elección del tratamiento y en la determinación de la pena, puede cometer abusos, contra los que es preciso prevenirse.»

Yo admito el respeto que debemos tener por el Poder Judicial, lo acepto en plenitud, pero entiendo que la ley debe ser clara, debe ser concreta, debe ser seria y debe ser objetiva. Y recuerdo aquella expresión de Anatole France cuando hacía hablar a su personaje Cranganville, y decía: «La majestad de la justicia reside por completo en cada sentencia dictada en nombre del pueblo soberano», pero recuerdo también cómo le fue a su personaje con este concepto de la justicia.

Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de dar un estatuto que no admita, en lo más mínimo, ningún tipo de subterfugios a su respecto, y la responsabilidad está dada para este Parlamento de la representación proporcional.

En la Argentina contemporánea hacía falta, por lo menos en el ámbito parlamentario, tener noción de estas opiniones sobre la realidad que en este momento tiene verdadera vigencia social, y este Parlamento es idóneo porque aquí están representadas las opiniones del socialismo, del liberalismo y las expresiones intervencionistas, que pueden darnos la solución ideal; la más lógica y acorde con el concepto social de la República.

Podrá objetarse que la constitución de este Parlamento no tiene su origen en la Constitu-

ción de Alberdi; podrá objetarse ese tipo de autenticidad y podrá decirse también que nuestro destino nacional encontró su salida en aquel decreto ley 250, sancionado a través de muchas incertidumbres, marchas y contramarchas.

Pero es evidente que hay una cosa cierta y que la realidad social salta a la vista, porque el pueblo argentino quiere votar y la opción es de hierro: o respeto por la voluntad popular o caos.

La experiencia de nuestro acontecer histórico contemporáneo, por cierto que deteriora nuestro acervo moral; si analizamos los últimos cinco presidentes, advertiremos que cuatro de ellos fueron electos merced a las leyes proscriptivas y al fraude. Con gran claridad, Oscar Alende, en su tesis de la revolución nacional, ratifica este concepto y dice así: «Desde 1930 mentimos la democracia. Cuatro de cinco presidentes han llegado a la más alta magistratura merced al fraude y las proscipciones. La opción es ya rígida: o remozamos nuestra democracia y afrontamos audaz y decididamente un proceso de revolución nacional, o caemos en el desorden y el caos que llevan al comunismo.» Su saldo no es por cierto favorable, pues aun a treinta y cuatro años de la caída del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, la realidad social argentina es cada vez más vacilante, y en el esquema de esta opción yo creo que debemos jugar seriamente a la realidad, porque ése es el juego de la democracia, cuya razón de ser, según Montesquieu, está en la virtud. Ya se ha dicho —y esto es cierto— que la honradez hace a la libertad como la corrupción hace a la tiranía.

Yo hablo como radical, y el radicalismo no puede tener otra esencia moral que no sea el respeto más absoluto por la voluntad del pueblo. Su acción y su norte fueron en todo momento el respeto por la criatura humana, y ésa fue la definición de sus creadores.

El hombre es un ser sagrado, dijo Hipólito Yrigoyen, en cuya frente lleva un rayo de la divinidad. El respeto de ese hombre —acota Gabriel del Mazo— es la comunidad del pueblo; el respeto de ese pueblo en la comunidad de naciones convierte la política en un fuero inmune y hace de ella una profecía de las más nobles y entrañables que haya en el ideal y en la vida humana. Y Alem termina este concepto en forma clara, cierta y definida: hay que combatir contra la insólita pretensión de no dejar a los pueblos gobernarse por creerlos incapaces de regir sus destinos.

Esta, en definitiva, señor presidente, es la lucha de la humanidad, es el proceso de la antigüedad, el acontecer violento en el pueblo de Israel que luchaba por sus conquistas, en la historia de Grecia analizada por Platón en cuanto concebía el gobierno en la trilogía de la esclavitud que trabaja, de las fuerzas armadas que defienden la nación y de los filósofos que

legislan. Es en Roma, en ese submundo de esclavos que luchaba por su reivindicación y que con palabra clara y emocionante Iehring definía en su *Lucha por el derecho*; es la época del feudalismo, de la lucha de las autoridades, de la lucha del pueblo contra los señores, de la lucha de los príncipes contra los monarcas; es la Revolución Francesa que envuelve en sangre las liberales doctrinas de los enciclopedistas; es, en definitiva, nuestra vida, es la lucha por la libertad, que yo he ubicado en nuestro suelo patrio, en mi posición radical, y que he analizado a través de las palabras de Alem y de Yrigoyen. Porque ellos fueron los voceros de esa tesis del pueblo, cuyo origen no tuvo otra causa que la de defender y la de ser realmente voceros de ese reclamo del pueblo argentino.

Es necesario retomar el camino andado; es necesario pensar si la tergiversación de treinta años, si la frustración de estos tres decenios puede dejarnos una lección para la historia.

Es necesario decir que no vivimos del culto de los muertos, en cuanto pensamos que las instituciones por ellos legadas están sobrepasadas en este momento por la realidad y por el acontecer social argentino. Pero es necesario, sí, decir que debemos respetar su mandato, porque en nuestro país el mandato de esos héroes del pasado aún no ha sido cumplido, y la conducta temática no ha dado, por cierto, resultado favorable.

Debemos volver a 1889, cuando en el Jardín Florida se constituía la Unión Cívica de la Juventud, y levantaba un programa que hoy debía ser nuestra bandera. Aquellos jóvenes, en aquel instante de la vida argentina, hicieron un manifiesto que tenía puntos categóricos de los cuales debemos tomar ejemplo. Decía el manifiesto: «Primero. Concurrir a sostener dentro del funcionamiento legítimo de nuestras instituciones las libertades públicas en cualquier punto de la Nación donde peligren. Segundo. Levantar como bandera el libre ejercicio del derecho del sufragio sin intimidaciones y sin fraude, y contener toda intervención oficial de los trabajos electorales. Tercero. Proger contra todo acto que turbe o impida el libre ejercicio del derecho electoral y perseguir el castigo de los culpables por todos los medios legales.»

Esas son las palabras que recoge más adelante la Unión Cívica Radical, con las que hace su bandera de lucha. Esto es lo que vemos a través del acontecer, cuando en 1891, en que se funda el partido, Alem discrepa categóricamente porque no puede estar de acuerdo en reemplazar la voluntad del pueblo por aquello que se dio en llamar la «solución patriótica».

Esa es también la posición de Hipólito Yrigoyen cuando le dice a Pellegrini, que lo instaba a buscar soluciones: «Cumpla con la Constitución el señor presidente.» Y a lo que Pellegrini le responde: «Cómo he de cumplirla si una revo-

lución de su partido quema en este momento mi rostro»; e Yrigoyen le dice entonces: «Cumpla usted con la Constitución, y ninguna revolución de mi partido habrá de quemar su rostro.»

Y ésta es la historia de la que debemos tomar ejemplo. Esta es la historia que hizo que Alcora advirtiera la realidad social argentina, y es la que permitió a Sáenz Peña dar la salida institucional de la Nación, aquella magnífica salida del año 16 que, analizada por del Mazo, la concibe —genialmente— en estos términos: «Así recomienza en 1916 lo constituyente argentino, proclamado cien años antes y formulado en 1853. Se realiza por primera vez el carácter representativo de la República, burlado durante décadas, retomándose la organización nacional sobre su base verdadera, sobre el pueblo de la Nación.»

Por eso formulamos esta objeción de tono categórico, porque discrepamos fundamentalmente en la filosofía, y porque debemos jugar con dignidad; pues este Parlamento de la proporcionalidad concreta, por primera vez, la representatividad más auténtica del concierto social argentino.

Ortega y Gasset nos dice que el Parlamento es el órgano de la convivencia nacional, demostrativo de trato y de acuerdo entre iguales. Y entre iguales podemos nosotros buscar la gran solución nacional, con este Parlamento que tiene representatividad moral y que la tiene también material, pues no puede haber en el país factor de poder, grupo de presión o de interés que intente parangonarse a su autenticidad.

Porque, por sobre todas las cosas, el Parlamento, genuino representante del pueblo, puede ostentar la vigencia de nuestros partidos políticos, nuestra historia y la voluntad soberana del pueblo que representa. Nada que no sea auténtico podrá lucir derechos inobjectables, porque nada ni nadie puede transmitirlos mejores —ni más perfectos— que los que posee. Nuestro presente y nuestro futuro aún incierto hablan con elocuencia. Alguna vez se hablará con seriedad de esta época que nos tocó vivir; alguna vez se analizará esta etapa del fraude y de las proscripciones; se comentará la opinión de aquellos curiosos ideólogos políticos, de aquellos militares excedidos y de aquellos —extraviados— que en su síntesis pretendieron resolver el problema a su voluntad, hablándonos del voto calificado o de la dictadura democrática.

¿Podrán alguna vez el fraude o las proscripciones reemplazar la voluntad del pueblo? Evidentemente fue oscura aquella época del fraude, como lo será también para la historia la época de las proscripciones. Y a veces hablamos de la necesidad de cambios de estructuras y cabe que nos preguntemos: ¿con qué autenticidad? No existe más autenticidad para tal efecto que la del pueblo mismo, y por ello debemos jugarnos, porque como en alguna ocasión lo dijo Alem, el destino está en el futuro y el futuro es nues-

tro. Si el pueblo quiere votar, dejémoslo hacer como quiera y por quien quiera, porque él es el soberano, y dejémoslo hacer con una ley inobjetable, clara y limpia para que después el pueblo, con sus representantes, controle y reforme si es menester las estructuras, pues lo hará con autenticidad, ya que como decía Martí, cuando el sufragio está en la ley, la ley hace la revolución.

Los hombres de la Unión Cívica Radical Intransigente, cuyo pensamiento interpreto, quieren que la ley orgánica de los partidos políticos esté absolutamente desprovista de todo tipo de ambigüedad. Por eso digo y repito que objetamos este articulado porque queremos una ley clara, seria y limpia.

Sabemos que la recompensa más preciada es la que ofrece honra sin provecho, y sabemos que nosotros jugamos al destino, pero preferimos la honra sin provecho para nosotros, porque el provecho será para el pueblo, que logrará así el cumplimiento de los derechos que reclama para llegar al horizonte de paz social que todos los argentinos reclamamos por igual.

Sr. Presidente (Pizarro). — Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

Sr. Pedrini. — Señor presidente: había preparado con verdadera pasión de argentino, con celo y responsabilidad, la exposición que iba a pronunciar en este recinto, pero, lamentablemente, dado el triste espectáculo que ofrece esta noche la Cámara de Diputados no voy a hacer uso de la palabra.

Mi decisión es porque no me gusta predicar en el desierto y porque en el recinto hay por lo menos siete u ocho bloques ausentes. De ninguna manera se puede negar a ningún señor diputado

que se retire de este recinto, pero es importante y de responsabilidad que, por lo menos, estén dos o tres diputados de cada bloque.

¿A quién voy a exhortar para entrar al diálogo amable que haga posible la sanción de un estatuto que sea garantía para todos los argentinos? ¿A quién me voy a dirigir para que el derecho, la Constitución y la ley nos cobijen a todos por igual? ¿Piensa el señor presidente, por ventura, que no he sentido profunda pena al escuchar las palabras sanas y bienintencionadas del señor diputado Bogliano, que han caído en el vacío ante la ausencia de casi todos los integrantes de este cuerpo? Para que los señores diputados puedan dialogar amablemente y sancionar el estatuto que el pueblo de la República reclama para bien de todos los argentinos, voy a pedir, en consecuencia, que se levante la sesión y que se reanude mañana a la hora habitual.

Sr. Presidente (Pizarro). — ¿El señor diputado hace indicación de que el cuarto intermedio que había resuelto la Cámara se inicie ahora?

Sr. Pedrini. — Sí, señor presidente; que se levante la sesión hasta mañana a la hora convenida.

Sr. Presidente (Pizarro). — ¿Es decir, que la Presidencia invite a pasar a cuarto intermedio hasta las diez de la mañana?

Sr. Pedrini. — Exactamente.

Sr. Presidente (Pizarro). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio, de acuerdo con lo resuelto oportunamente, hasta el día de mañana a las 10.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 22 y 30.